

SI, NO. SI, NO. SI, NO. SI, NO. SI, NO.
SI, NO. SI, NO. SI, NO. SI, NO. SI, NO.

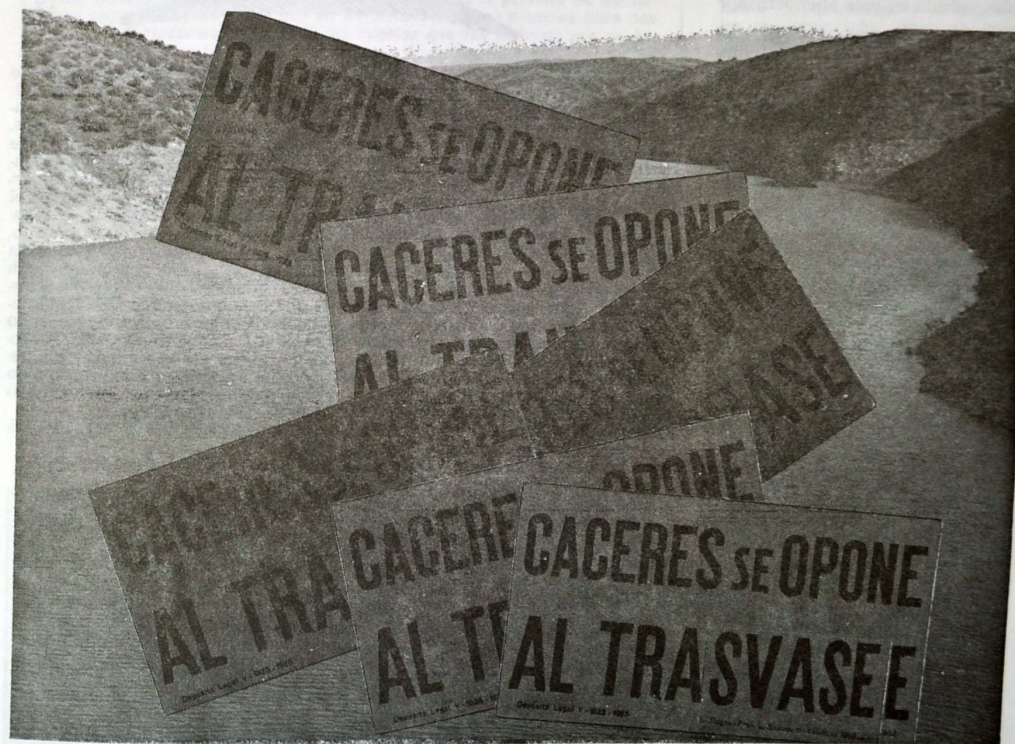
SI Y NO

por José María Parra



- SI** Está uno satisfecho por tener una nueva tribuna desde la que intentar defender los intereses de la tierra.
- NO** es nada fácil conseguirlo, y en solitario.
- SI** es una sección para todos los cacereños.
- NO** queremos realizarla uno solo. Todo aquello de su localidad, su comarca, su profesión, sus enemigos... pueden contárnoslo por carta remitida a la Dirección de la revista ALCANTARA.
- SI** queremos ya entrar en materia.
- NO** perder más tiempo.
- SI** a que Extremadura se una bajo un solo mandato eclesiástico. Es positivo que nos vayamos reuniendo y tomemos conciencia de nuestros auténticos problemas y busquemos soluciones. Máxime en ésta, que es una tierra de misión.
- NO** a que la provincia eclesiástica se denomine Emeritensis-Pacensis.
- SI** a que se llame Emeritensis-Cauriensis.
- NO** al folklorismo y la palabrería.
- SI** a la efectividad y la equidad.
- NO** a que se haga pasar, una vez más, a Cáceres, bajo las horcas caudinas de las posturas personales o las apreciaciones individuales o interesadas.
- SI** a que lo extremeño, hasta en la nominación, esté integrado por todos.
- NO** a que incluso en lo religioso quiera descompensarse.
- SI** porque debe ser, a la actualización de las estructuras, pero todas.
- NO** a tacharnos de provincianos y «camapanaristas» para argumentar que la unidad está por encima... claro, cuando ese encima se consigue saltando por sobre Cáceres.
- SI** al uso de argumentos futuristas.
- NO** al olvido de lo que es historia y ha de hacerse valer como tal. Por ejemplo: la diócesis Emeritensis se creó en el siglo III, aunque no hay datos fidedignos; la Cauriensis, en el año 338, siendo Papa San Clemente (el primer obispo del que se tienen noticias es Joaquin, en el 589; de la Pacensis, sufragánea de Mérida, el dato más antiguo que hemos localizado se refiere a 1208).
- SI** cambiamos de tema.
- NO** queremos olvidarnos de que Extremadura se compone de dos provincias, ni de que nosotros vivimos en Cáceres.
- SI** a esa búsqueda de identidad que ahora propugnamos todos, ese querer ostentar nuestro protagonismo.
- NO** a los pocos esfuerzos serios que se hacen por conseguirlo. Se continúa creyendo que el maná sigue cayendo desde el cielo. O desde la jerarquía, sea cual sea.
- SI** a que todos colaboremos en dar la clave exacta y precisa.
- NO** a que continuemos teniendo una clase dirigente procedente de otras tierras. Aunque se hayan integrado ¿Dónde están nuestros hombres? Si no los hay, será necesario continuar pariendo los.
- SI** a que el esfuerzo de estos que nos orientan (?) es positivo.
- NO** a que «marchóse y no hubo nada».
- SI** a que los partidos políticos se partan el pecho por la tierra, esta tierra.
- NO** a que sus cabezas visibles se partan la cara por ocupar el «puesto». Eso no sirve más que para castigar al político honrado, que se las tiene que aprender todas si quiere cumplir con su promesa.
- SI** a las cartas en defensa de aquellos que se la merecen.
- NO** a la sensación de que todas tienen el mismo estilo y han sido mecanografiadas en la misma máquina.
- SI** al escribirlas.
- NO** a decir que se la han dado a uno escritas puestas a la firma.
- SI** a nuestra Universidad, por lo que ella significa en cuanto a renovación de la vida, en cuanto a posibilidades, aunque no acabe de integrarse plenamente en la sociedad cacereña.
- NO** a que también puede estar siendo utilizada en base a la desestabilización regional. Evidentemente al decir esto no lo hacemos porque nos temamos un «mayo» extremeño, sino porque también se pretende que contribuya al desequilibrio extremeño.
- SI** nos tienen a su disposición.

la espina del trasvase cáceres sigue esperando las compensaciones, ¿que llegan? ¿que no llegan?



«¿Cómo creen ustedes que en la responsabilidad de un Ministerio de Obras Públicas cabría siquiera imaginar que se pudiera hacer un trasvase, vistiéndolo a unos para desnudar a otros?», preguntaría el titular de la cartera, Federico Silva Muñoz allá por el año 1967.

«Quiero decir que el Ministerio de Obras Públicas tiene la mirada puesta en la provincia de Cáceres, una de aquellas que forman parte, junto a otras regiones españolas, del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, dentro del cual las circunstancias de la provincia de Cáceres, tendrán un cauce ancho y un tratamiento expeditivo», palabras éstas del Director Ge-

neral de Obras Hidráulicas, Oñate Gil, después ministro de Agricultura.

«Añado algo más —dijo Silva Muñoz a una Comisión de la provincia, que se reunió con él en Madrid el 8 de mayo de 1968—. El aprovechamiento conjunto es el título para dar una preferencia a la provincia de Cáceres». También afirmaría: «El Ministerio se vinculará en la realización de estas obras a unos plazos y ha de mantener continuos contactos con la provincia para que sea la propia provincia vigilante de las realizaciones que en ella se acometan por parte del Ministerio de Obras Públicas».

Despacho del gobernador civil, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento. Despacho ocupado, a la sazón, por Federico Trillo-Figueroa y Vázquez.

Corre el año 1968, y una parte del país, superado el duro trance de la llamada estabilización, vive en plena euforia desarrollista. La provincia de Cáceres, que empezó

la década de los 60 con 544.802 almas, no cuenta ya con muchas más de 470.000. El desarrollo, ajeno, anda mordiendo la más preciada riqueza cacereña.

Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, durante seis años alcalde de Cartagena (provincia de Murcia), hace lo que puede por quebrantar las últimas resistencias que le oponen tres alcaldes cacereños, Julián Burgos, de Plasencia, Antonio Cisneros, de Alcántara, y Emilio García, de Navalmoral de la Mata, comisionados por el resto de los alcaldes de la provincia para seguir tratando con «la primera autoridad» el conflictivo tema del trasvase.

El mismo Trillo-Figueroa propuso, sugirió u ordenó esta reunión. Lo hizo así para capear el temporal que levantara Antonio Cisneros Montemayor, quien en acto público celebrado en la Casa Sindical, había echado en cara al gobernador



JULIÁN BURGOS

6 - ALCÁNTARA

LA MEDALLA DEL AMOR Y EL REVERSO DE LA MEDALLA



que, siendo como al parecer era o había sido, presidente de una comunidad murciana de regantes, no se inhibiera en la cuestión del trasvase, así como que «hubiera falseado la verdad del no que Cáceres daba al proyectado trasvase, presentándolo en Madrid como un sí».

—Me has violentado delante de todos —se queja entre amarga y coléricamente el gobernador.

Insiste Cisneros y cada palabra que se pronuncia eleva el tono de la palabra que sigue. Hasta que el alcalde de Plasencia, Julián Burgos, no puede contenerse más y, dirigiéndose a la primera autoridad provincial, ex-alcalde de Cartagena, persona aparentemente vinculada a los intereses de los regantes de la cuenca del Segura, explota:

—¿Sabes lo que te digo...? Que eres un hijo de...

cuantos alcaldes se significaron de algún modo ostensible, fueron «dimitados» o cesados fulminantemente. Y estratégicamente sustituidos.

Meses más tarde, hacia finales de 1969, Julián Burgos, a quien le cupo un trágico final, sonreía amargamente al enterarse de que el Ayuntamiento de Plasencia, comandado para entonces por Juan Fco. Serrano Pino, su sustituto, hacía entrega a Trillo-Figueroa de una placa conmemorativa de su gestión. El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, alcalde ya Julio Sánchez-Fuentes, le concedió la Medalla de Oro de la ciudad, y los periódicos regionales anunciaron con gran y probablemente intencionado deslenguaje tipográfico:

DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA, HIJO ADOPTIVO DE CÁCERES.



UN HIJO ADOPTIVO DE CÁCERES

Aquel exabrupto marca quizá el cenit de la más o menos organizada oposición de Cáceres al trasvase del Tajo. El cenit y el definitivo comienzo del ocaso. Julián Burgos, Antonio Cisneros, Emilio García y

LA CORPORACION MUNICIPAL EN PLENO EXTRAORDINARIO, POR ACLAMACION Y UNANIMIDAD, ACORDO CONFERIRLE ESTE TITULO

Por aclamación y unanimidad, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 1969, fecha en la cual

Febrero 1980

opinion

Sobre el trasvase Tajo-Segura

Por Antonio Cisneros Montemayor

Seamos sensatos y tengamos cordura ante la información pública del anteproyecto del tan manoseado trasvase de nuestras aguas a tierras de Levante.

Pero que esa sensatez y esa cordura no sean un servilismo o un conformismo para que otros se aprovechen a nuestra costa.

Seamos sensatos para defender, aunque sea con los dientes, lo que está en juego, que es nada más y nada menos que el porvenir de las tierras cacereñas, para evitar que en una mañana próximo nuestros hijos nos exijan que rindamos cuentas de las migajas que les dejamos por no haber sabido defender nuestros legítimos derechos. Sepamos reaccionar como es debido habiendo dicho ¡¡NO!! al trasvase y habiendo aparecido un ¡¡SÍ!! por estar preparado y manipulado.

Nos dicen que el trasvase convertirá en un delicioso vergel a las tierras murcianas a causa de la denigrante sangría de nuestra tierra. Nos dicen que el trasvase será sufragado por la renta nacional, o lo que es lo mismo, que todos los españoles haremos ese regalo a Murcia. Nos dicen que las aguas que llegarán a Levante tendrán que ser gravadas para paliar tan insostenible gasto.

Nos dicen que existía otro anteproyecto de dotar de aguas a la rica región murciana mediante la desalinización de las aguas del mar, pero que tal anteproyecto ha sido desechado en detrimento de nuestra pobre y sufrida provincia. Nos dicen... que llenos de indignación y viendo nuestra impotencia de defender a nuestra tierra, unos cuantos cacereños, para que la historia no nos señale como culpables, hemos presentado la dimisión de los cargos políticos que nos dieron.

Nos llena de pena esa impasibilidad provincial, porque con ese presupuesto que se comenta, auténtica sangría a la nación, Cáceres, nuestro Cáceres, se convertiría en la provincia de mayor rendimiento de España y sería la despensa cárnica de Europa.

¿Os habéis detenido en imaginar las grandes extensiones del Arriño, de los Cuatro Lugares, de Cáceres, Montánchez, Trujillo, Malpartida, Arroyo, Brozas, Alcántara, Valencia, etc. etc., susceptibles de riego en pradera, llenas de campos verdes en agosto, triplicada la producción y modernizada nuestra cabaña? ¿No creéis que merece la pena luchar por ello, por convertir a nuestra provincia en la DESPENSA CÁRNICA DE EUROPA? ¿No creéis que eso es más rentable a la nación que la producción de agrios y tomates a que se va a destinar nuestra agua?

Ello por sí sólo descubre una confabulación que para silenciarla es presidida en nuestra tierra por quien ostenta la presidencia de la Comunidad de Regantes de Murcia. Esto es lo que dignamente me ha obligado a dimitir tras escenas de la mayor violencia, pero que él se encargará de acallar quejas, hacer silenciar a timoratos y a que con el tiempo se olvide y se conforme.

Hablan de compensaciones y por lo visto es para incluir en ellas lo mucho que Cáceres necesita y que están obligados a darnos, no como compensaciones, sino como igualdad y equidad a otras provincias.

Dios haga que un día no tengamos que sentir cuando ya sin remedio, comprendamos que nos quitaron nuestra mayor riqueza, la savia de nuestras calcinadas tierras.

Es por ello y con la exposición que significa que una vez más defien da que debemos mantener nuestro ¡¡NO!! rotundo y masivo, nuestro ¡¡NO!! categórico a ese proyecto que aún está en período de información, y pedir un estudio orográfico de nuestra provincia, que se mejore nuestra agricultura, nuestra ganadería, que nos hagan escuelas, que con el 50 por 100 de lo que importe el trasvase nos rieguen el 70 u 80 por ciento de nuestra provincia; que saque a Cáceres de su miseria, que Cáceres abandone el deprimente último lugar que ocupa en la renta nacional; en una palabra ¡¡justicia para Cáceres!! y quedemos con nuestro río que Dios en su infinito poder quiso que por sus tierras tuviera la mayor galopada.

Alcántara, junio de 1968.

NOTA DE LA REDACCION.—Este artículo, escrito por uno de los alcaldes que se enfrentaron a Trillo-Figueroa, no pudo salir cuando fue escrito. Lo publicamos ahora para que dé testimonio.



la Corporación cacereña estaba formada por Díaz de Bustamante, Sánchez Polo, Ríos Valiente, Mur, Pérez, Gil y Gil, Polo, Guerrero Ramos, Bazaga, Casares Muriel, Rodríguez Durán, Borrellá Neila, Vela Rodríguez, Iglesias Rivera y Guerrero Beltrán.

«También le quisieron hacer y lo propusieron para hijo adoptivo y medalla de la provincia. A los organizadores les escribí serias y fuertes cartas y parece ser que corté la iniciativa, al menos en el carácter público, pues no sé si a escondidas lo hicieron», recuerda desde Sevilla Antonio Cisneros Montemayor, que fue uno de los motores de la oposición y que, tras haber cesado como alcalde de Alcántara, sufrió todo tipo de amenazas. «Me habló de detenerme y le dije que no me importaba, pues yo había dado orden que si a la una no me



Alfonso Díaz de Bustamante, alcalde del Ayuntamiento que hizo hijo adoptivo de Cáceres a Trillo-Figueroa y otorgó Medalla de Oro de la ciudad a Silva Muñoz.

presentaba o llamaba, que comunicasen a Franco mi detención por haber pedido justicia. No se atrevió en aquel momento, pero después supe que tenía todo preparado... y me vine».

Muchos fueron, en verdad, los amenazados por aquellas fechas, entre julio de 1967 y diciembre de 1969, período durante el cual gobernó la provincia Federico Trillo-



opinion

El trasvase en la Prensa cacereña

Por Germán Sellers de Paz

En estos días hace la friolera de veinticuatro años —a disposición de todos está su hemeroteca— que en el Diario «Extremadura» iniciamos la exposición de una serie de preocupaciones sobre esas 158.000 Has. precisas de regarse en la provincia de Cáceres, grandes repoblaciones, industrialización de la misma, el aprovechamiento de los recursos naturales, mejoras de sus carreteras y otros temas que, juntamente con la urgente y necesaria creación de una Universidad para Extremadura, han sido caballo de batalla de una actuación profesional tesonera, realizada con el apretar o aflojar que nos permitía cada momento y que, años más tarde, con motivo de la Ley 21/1971 sobre aprovechamiento Tajo-Segura, se nos diese la oportunidad de recibir cierta advertencia en relación con las Islas Chafarinas, como se sabe, pequeño archipiélago de España, frente a la costa marroquí, cuya población, de forma transitoria, está constituida por militares, faroleros y pescadores...

Lo anterior es simplemente una ligera justificación de que el periodista que se dirige a ustedes ha querido, en todo momento, estar en la plaza, pisando el terreno que podía en cada momento, cogiendo al toro por los cuernos, cada vez que le era posible, para ofrecer al respetable de la provincia, junto a su mejor voluntad, la lidia que en cada momento le era permitida.

Ahora que se me pide un trabajo sobre el Trasvase —siempre mantuvimos debiera adoptarse este nombre y no el aprovechamiento conjunto con el que oficialmente se le bautizó— es el momento de recordar parte de lo dicho por mí en las páginas de los periódicos locales «Extremadura» y «Cáceres».

Nos servirá para quedar constancia de que entonces, si no se dijo todo lo que se debiera haber dicho, si se dijo, en cada momento, más de lo que se podía decir. En este juego de palabras se encierra la relación Prensa-Trasvase en aquellos años.

Relación Prensa-Trasvase a la que nos anticipábamos en casi cuatro años, como puede verse en la tercera página del Semanario «Cáceres» del día 31 de julio de 1967 (recordemos que la Ley del Trasvase es del año 1971), en la que textualmente decíamos: «Se proyecta el trasvase de las aguas del Tajo al Segura. No somos técnicos para analizar la conveniencia del carácter nacional de tal proyecto, ni su rentabilidad, también a nivel nacional».

«Pero, eso sí, como cacereño que año tras año y decenio tras decenio, hemos visto nuestros problemas, parte de los que encontraron solución y los muchos que quedan por resolver, en conciencia hemos de aportar nuestras opiniones en torno a un problema que nos afecta a todos...»

«No podemos dejar pasar sin quemar los instantes de una vida, cuando en esos instantes se juega la provincia muchas veces el bienestar de muchos: de una gran parte de sus hijos».

Estas frases eran un partir en nuestro artículo «Justísimas aspiraciones de la provincia», escrito hace doce años y cuatro antes de la Ley vicia, en aquel entonces —31 de julio de 1967— se encontraban cifras «en un plan completo de aguas a los principales núcleos urbanos de la provincia, que podría formarse a la vista del estado de necesidades que nos en unos momentos en que lo conocíamos personalmente, al dedicarlo, por nuestra condición, en aquella época, de funcionario encargado de tal cometido», la puesta en regadío de todas las tierras susceptibles de mejoras, aprovechando al máximo los actuales caudales de la cuenca del

Figueroa y Vázquez, ex-alcalde de Cartagena y, a sus postres, como queda relatado, hijo adoptivo de Cáceres y demás honores. Incluso el llamado «cuarto poder» hubo de tentarse la ropa y tragarse muchas de las líneas que hubiera querido escribir. Y los presidentes de los Consejos Sindicales de Trabajadores y de Empresarios, a los cuales el 27 de julio de 1967, se les había planteado el trasvase en términos como éstos:

«De todos es conocido por manifestaciones oficiosas y oficiales el proyecto del Ministerio de Obras Públicas de producir el trasvase de agua de la cuenca del río Tajo a la del Segura con el fin de regar una extensa y seca zona del sureste español. No se nos oculta la importancia que en el orden económico supone para el desarrollo de la nación en general tan trascendental obra», fueron las palabras que pronunciara De la Torre Lázaro, delegado provincial de Sindicatos, quien destacó la importancia —¿?— que para todos tendría la gran producción hortofrutícola que podría lograrse en el Sureste español con las aguas a trasvasar y las ventajas que esto ocasionaría de cara a la posible incorporación de España a la CEE.

Muchos, muchos fueron los amenazados y los que hubieron de callarse. Y así, cuando Trillo-Figueroa marchó a Burgos, colmado de honores, la oposición al trasvase se había desdibujado. El pueblo cacereño, resignado a la fuerza, pensaba ya más que en oponerse en negociar. Negociar lo que se le permitiera y hasta donde se le permitiera.

DE INDALECIO PRIETO A SILVA MUÑOZ

Aunque a preocupación por suministrar aguas «a las sedientas tierras del S. E. español» —preocupación al menos entre las gentes del «sediento S. E. español»— se hace remontar nada menos que al siglo XVI y aunque ya durante la Dictadura de Primo de Rivera, por idea de Guadalupe, se piensa en la posibilidad de que tales aguas sean sustraídas al Tajo, lo cierto es que el proyecto no viene a tomarse absolutamente en serio hasta el año 1933.

El entonces ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, a la vuelta de una correría ministerial por el litoral mediterráneo, recuerda de la cual aún quedan vestigios en Alicante, acoge el proyecto de trasvase concebido por el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo. Otros ingenieros. De los Ríos y Cuervo, lo estudian críticamente y plantean soluciones alternativas, como hacer el trasvase a costa sólo de las aguas del Ebro o hacerlo con las del Ebro, las del Tajo y las del Júcar conjuntamente.

Tajo —seguimos hablando en el año 1967— y declaración por el Gobierno de zona de preferente localización industrial la provincia de Cáceres, con los máximos beneficios de todo orden en la legislación vigente, todo lo cual podría amortizarse —se decía concretamente— mediante un canon a observar por los futuros usuarios como consecuencia del trasvase que se proyecta».

Llegó la Ley y con ella los tiras y aflojas, las entrevistas con el ministro de Obras Públicas, Silva Muñoz y con el director general de Obras Hidráulicas, Virgilio Oñate, las peticiones a todos los niveles, aquella información pública de la que habría para escribir un libro, la convocatoria de una rueda de Prensa en Madrid, a la que acudimos los entonces máximos responsables de la Prensa Regional Herminio Pinilla Yubero, Dionisio Acedo Iglesias, Fernando Sánchez Sampedro, Narciso Puig Megías y el autor de este artículo y de la que no pudimos informar a nuestros lectores pues no llegó a celebrarse.

Se hablaba en aquellos momentos de colaboración y por los cacereños se entendió —una vez más iban a ser sorprendidos por las alturas— que ésta no podía negarse cuando las palabras estaban escritas, «...el trasvase no es un canal o una tubería. El trasvase —se dijo textualmente— es un conjunto de obras a realizar en la cuenca del Tajo y en la cuenca del Segura...», con lo que quedaba plenamente demostrado que en el ánimo del Ministerio de Obras Públicas, y del propio ministro —suya es la frase— estaba el aprovechar integralmente ambas cuencas, proporcionando a sus habitantes los beneficios de esta importantísima obra, no causando daño a nadie, al afirmar que —hay que consignarla textualmente— «No cabría imaginar que se pudiese hacer un trasvase, vistiendo a unos para desnudar a otros».

Pese a las gestiones de todo tipo, nubladas en algunas ocasiones por coincidencias inexplicables tales como que el gobernador civil de Cáceres fuese nombrado para igual cargo en Murcia y que el alcalde de Cartagena le sustituyese en nuestra provincia, nunca se pudo convencer a los cacereños de que no se ha tratado de un simple trasvase, un trasiego, al consistir, mientras no se demuestre lo contrario, el pasar el agua de una cuenca a otra simple y llanamente, aunque esta expresión estuviese valorada en bastante más —en aquella fecha— de los 6.500 millones de pesetas.

Así están las cosas a ocho años de la promulgación de la Ley del trasvase y solamente nos cabe preguntar —aún sin perder todas las esperanzas— si algún día veremos logrado el auténtico aprovechamiento conjunto.

Nuestra colaboración, la de la provincia, fue por delante, perdiendo aguas que la pudieron redimir.

Aunque tarde, esperemos esa reciprocidad, pues nuestra provincia, Cáceres, creemos que se encuentra entre esas «provincias españolas, igualmente dignas de respeto y protección que la que pudiera aprovecharse del trasvase, a que se aludió un 3 de junio de 1967 —se han cumplido ya los doce años— desde la Ciudad Imperial. ■



Trillo-Figueroa en una de sus intervenciones.

El proyecto, en parte quizá por el poco tiempo ministerial de que dispuso el ilustre político, pero sobre todo por la feroz oposición que levantaría... entre los regantes del Júcar, que tenían la competencia de los productos de la huerta del Segura, quedó archivado, diríase que para siempre.

Alfonso Peña Boeuf, en 1941, estuvo a punto de desarchivarlo, pero todo se quedó en casi nada. Hasta que a comienzos de 1967, concretamente el 25 de enero, los gobernadores civiles de Madrid, Toledo y Cáceres, convocados al efecto por otro ministro de Obras Públicas, político de ideología tan contrapuesta a la de Prieto como es Silva Muñoz, se enteran de que el Gobierno ha tomado la decisión inapelable de hacer realidad el trasvase de las aguas del Tajo a la cuenca del Segura.

Para tal fecha es gobernador de Cáceres Alfonso Izarra. Gobernador civil, jefe provincial del Movimiento, y, para que nada quede suelto, presidente nato de la Diputación Provincial.

La información que por boca del ministro reciben él y los otros dos gobernadores convocados se les da —hay que pensarlo— para que, con toda la omnipotencia del poder delegado que detentan, se preparen a hacer frente a la lógica oposición que ha de surgir en las provincias que de alguna forma se sentirán damnificadas.

Cinco días después, en el teatro «Romea», de Murcia, Federico Silva Muñoz, en olor de multitud, da a conocer la política hidráulica para «las sedientas tierras del S. E. español».

—El agua es la gran savia fecundadora de nuestro siglo; pero para obtenerla necesitamos planificar grandes operaciones hidráulicas a nivel nacional. No son problemas técnicos de ingeniería, sino que es una obra humana y política, que demanda la solidaridad española. No se trata de quitar agua a nadie, sino de repartir aquellos excedentes que tengamos de un modo equitativo.

Y para que no quede duda de que la decisión, aún sin estar todavía sometida a información pública, no se verá alterada por nada ni por nadie, añade:

—Esta es una fecha histórica, porque hay una esperanza fundada de que los trasvase de aguas de otras cuencas a la del Segura se conviertan en gozosa realidad a partir del II Plan de Desarrollo Económico-Social, es decir, entre 1968 y 1972. Durante este año recién comenzado se concluirán los estudios en el Ministerio para que puedan ser aprobados por el Consejo de ministros e inmediatamente puestos en ejecución.

De donde se deduce, naturalmente, que el «fiat» estaba dado antes de que los estudios probaran la conveniencia e incluso la factibilidad, así como los costes del proyecto.

dose con el eufemismo de «aprovechamiento conjunto».

—Trasvase, conjunto de obras y acciones —palabras en Toledo del «ministro eficacia». Señores: Lo primero que les quiero decir a us-



Federico Silva Muñoz, promotor del trasvase y medalla de oro de la ciudad de Cáceres.

Palabras, éstas y otras, que sonaban muy bien, claro que, en los oídos de quienes se beneficiarían del inapelable proyecto, dado por realidad antes de que los estudios estuviesen concluidos, como reconoce el propio Silva Muñoz, pero que empezaría a sonar muy mal entre aquellos que, aun pensándolo, aún no llamaban expolio a un trasvase que, de parche retórico en parche retórico, acabaría encubriéndose.

tedes es que yo nunca he dicho que el trasvase se fuera a hacer parcialmente. Siempre hablé de la simultaneidad.

¿Y LA PRENSA...?

Mientras que la Prensa local, hasta donde le era posible hacerlo sin acarrearle los anatemas de un régimen que no toleraba discrepancias, mostraba su oposición, la prensa

sa nacional, en términos casi generales y tal vez porque los tiempos no daban para más, a pesar de la puerta que entreabriera Fraga Iribarne, no rechazaba la idea.

Así «Ya», por ejemplo, escribía:

«El agua del Tajo es contenida en el Mar de Castilla, auténtico recipiente hidráulico hiperanual formado por los pantanos Entrepeñas y Buendía. Aguas abajo se encuentra el de Bolarque, también adscrito a esta teoría de pantanos. De ahí partirán los 1.000 millones de metros cúbicos de agua al año, que el resto de las regiones bañadas por el Tajo no utiliza. De Bolarque, a través de un canal de 85 kilómetros, el agua será depositada en otro pantano hiperanual, el enorme de Alarcón y, seguidamente, por otro canal de una longitud aproximada, llegará el agua a la cabecera del Segura, al Talave, entre los de Conajón y Camarillas. Y se hace así para que todos, absolutamente todos los intereses huertanos, queden satisfechos al mismo nivel, desde arriba hasta la misma desembocadura del río huertano, en la línea límite de Alicante con Murcia».

«ABC», por su parte, el 4 de abril, cuando ya los ánimos de las provincias ribereñas del Tajo empezaban a exaltarse, decía:

«Se trata, ante todo, de un proyecto que por la solera de sus antecedentes —entre los que resulta obligado mencionar los nombres de dos ingenieros ilustres, Rafael Gasset y Manuel Lorenzo Pardo— debe estimarse bien madurado, bien medido. Más si se tiene en cuenta que ya en 1941 volvió a formar parte del Plan de Obras Hidráulicas trazado por Alfonso Peña Boeuf. Estamos, pues, no ante una novedad, sino ante una de esas obras que por su envergadura tardan en llegar a su momento de realización. Así hay que esperar, incluso desde éste su lado técnico, que el trasvase respetará los legítimos derechos adquiridos de los regantes del Tajo.» Y añade: «Debe pensarse que la técnica en estos casos, igual que ocurre con los aprovechamientos hidroeléctricos, no avasalla al derecho. Todo proyecto de esta naturaleza se ajusta a la legislación correspondiente, que ampara en la forma y medida determinadas en ella los derechos de los particulares. No hay razón, pues, para temer injustos perjuicios».

Honor a «La Vanguardia», que el 25 de abril, puntualizaba:

«Por otra parte, el agua a trasvasar al Segura se detrae de aprovechamientos alternativos en otras cuencas, también con un destino previsible y fundamente agrario. De ahí que quepa preguntarse, ¿dónde y en qué cuantía es más rentable el uso del agua, teniendo en cuenta tanto los costes como los beneficios en uno u otro

uso? Los mayores beneficios que cabe prever en el Sureste pueden producir índices de rentabilidad inferiores a los de otras zonas, habida cuenta de los mayores costes de inversión y explotación que los trasvases han de originar».

«Aunque se cuente a favor de esta obra, y del éxito, de la transformación de las nuevas superficies de regadío que origine, con la tradición regante del Sureste, con la capacidad técnica y empresarial de sus agricultores, o con el potencial de industrialización de esta región, no puede asegurarse, dentro de una racional técnica planificadora, la viabilidad de esta transformación si se prescinde de otros im-



portantes factores condicionantes igualmente de tal viabilidad.»

También en «Arriba», aunque sin hacer mención a los derechos de la provincia cacereña, escribió el columnista Dominguez:

«La teoría de que «el agua que pase por mi puerta en primer lugar me pertenece a mí» podrá parecer un tanto bárbara, pero es absolutamente natural».

EL OPORTUNO CAMBIO DE GOBERNADORES CIVILES

Durante los primeros meses del año 1967, cuando se empieza a ver que lo del trasvase es un toro desmandado al que no habría fuerza capaz de sujetar, pero se advierte también que por esta vez el otro toro, el de la opinión pública cacereña, no sería de fácil lidia, es gobernador civil de Cáceres, como ya queda dicho, Alfonso Izarra Rodríguez. Presidente de la Diputación Provincial, hasta el 15 de abril del mismo año, fecha en la cual cesa a petición propia, Martín Palomino Mejías.

Alfonso Izarra era gobernador desde el 21 de febrero de 1964, cuando sustituyó a Francisco Boco Cantalapiedra. Tres años, frente a un escaso de su inmediato antecesor, a los casi dos que estuvo Herrero

Fontana y al ni uno de Azcárraga y Bustamante, primeras autoridades provinciales que estuvieron en Cáceres durante la década de los 60, aparte, naturalmente, de Licinio de la Fuente, que la comenzó, y de Valentín Gutiérrez Durán, que la concluyó, no hacían de Izarra tal vez el hombre más apropiado para enfrentarse a la opinión pública cacereña.

Se necesitaba un hombre nuevo, un hombre no vinculado, ni sentimentalmente, a la provincia. O muy ligado a la de Murcia. El 1 de julio de 1967, en Madrid, tomaba posesión del Gobierno Civil de Cáceres Federico Trillo-Figueroa y Vázquez. Simultáneamente Alfonso Iza-

ción Brañas Martínez, Díaz de Bustamante y los delegados Bonilla Lapuerta, Hanza, Gómez Clemente, López Fernández y López Montenegro, además de una comisión vendida especialmente de Cartagena y hay que suponer que especialmente jubilosa por la designación.

DEL «CACERES SE OPONE AL TRASVASE» A LA NEGOCIACION

Mientras que por medios cacereños circulan pegatinas de distintas clases y tamaños, todas coincidentes en afirmar que «Cáceres se opone al trasvase» y muchas de ellas financiadas a título enteramente particular por Francisco Rivero de Jódar, el nuevo gobernador civil no pierde el tiempo en dar la batalla.

Apenas veinte días después de su llegada, el jueves 27 de julio, se convoca en la Casa Sindical una reunión a la que asisten, entre otros y con el propio Trillo-Figueroa en la presidencia, el delegado provincial de Sindicatos, De la Torre Lázaro; la procuradora en Cortes de representación sindical Purificación Sedeño; los presidentes de los Consejos Sindicales de Empresarios y de Trabajadores, Alonso Paniagua y Sánchez Barrena, y el secretario provincial de la Organización Sindical, Jiménez Acedo. Se trata, según la convocatoria, de aprobar una moción «de gran interés» para la provincia.

La presenta De la Torre Lázaro



Federico Trillo-Figueroa

—De todos es conocido por manifestaciones oficiales y oficiales el proyecto del Ministerio de Obras Públicas de producir el trasvase de

aguas de la cuenca del río Tajo a la del Segura...— empieza De la Torre Lázaro y, tras defender la necesidad del trasvase y hacer una exposición sucinta de algunos de los males que aquejaban —y aquejan— a la provincia cacereña, con grandes aplausos y una sola aclaración crítica de José Canal Rosado, según la Prensa local, se aprueba la siguiente moción condicional y contenida en estos cinco puntos:

«1.—Plan completo de abastecimiento de aguas a los principales núcleos urbanos de la provincia».

«2.—La puesta en regadío de todas las tierras susceptibles de tal mejora, aprovechando los actuales caudales de la cuenca del Tajo».

«3.—Declarar zona de preferente localización industrial a la provincia de Cáceres, con todos sus beneficios».

«4.—Como consecuencia del trasvase del Tajo a otras cuencas, los usuarios futuros de tales aguas deberán abonar un canon en la cuantía que se considere equitativa por los organismos competentes para amortizar los gastos realizados para la ejecución de los planes que quedan expresados en los apartados anteriores, tanto en Cáceres como en otras provincias afectadas».

«5.—El gobernador presidirá una Comisión de autoridades provinciales, técnicos en cada materia y representantes sindicales, que gestionen con la diligencia característica de nuestra primera autoridad la consecución de los objetivos que se proponen en esta moción y otros análogos que pudieran resultar viables para el desarrollo provincial».

Canal Rosado corta los aplausos para decir que está de acuerdo con la moción siempre que se indique más claramente la necesidad de hacer los regadíos cacereños antes del trasvase, y Trillo-Figueroa, cuyo objetivo empieza a cumplirse, cierra el acto diciendo:

—Conozco las tierras de Levante y muy poco las tierras de Cáceres. Pero gracias a Dios mi criterio de objetividad, honestidad y entrega me permiten ver estos problemas con la suficiente justicia para plantearlos donde sea preciso. Tengo entendido que no se trata de usufructuar al Tajo aguas que el Tajo puede verter en provincias españolas, sino las que vierte en el Océano Atlántico— prometiendo convertirse en abanderado de las comisiones que formen para pedir todo aquello que necesite esta deprimida provincia».

«Es necesario clamar pero con inteligencia y seriedad» para sacar adelante todas las demandas del Cáceres que él, Federico Trillo-Figueroa, estaba allí representando.

El acto, aun con lo que conllevaba de táctica y dirigida renuncia a la oposición y de comienzo de un pacto a la fuerza, abrió un parentesis de esperanza incluso entre los



opinion

Apuntes sobre el trasvase

Por Martín Palomino Mejías

Difícil es hacer realidad el propósito de permanecer alejado de aquella actividad que durante un importante período de tu vida, constituyó una hermosa, apasionante e inolvidable aventura; pues siempre habrá alguien que reclame tu opinión o bucee en tus recuerdos, cuando la tarea fue pública e incidió de algún modo en la comunidad.

Por ello no concibo cómo puede juzgarse la vida del hombre público con tanta trivialidad y falta de respeto, contemplándola y analizándola sólo desde el prisma de la ambición y de la vanidad. En fin, cada uno es muy dueño de hacer sus cábalas y comentarios, aunque bien convendría a la paz y a la salud social, que la persona consagrada al quehacer político, con seriedad, honestidad y competencia, sin perjuicio de las discrepancias de criterios, fuese tratado con respeto y consideración, al ofrecerse como figura que encarna la imagen real de la sociedad que lo elige; pues despreciable sería el grupo social o humano que designara sus representantes con tanta ligereza e irresponsabilidad, optando por quienes no fueren acreedores a ejercer dignamente la función que se le encomienda.

Después de este espontáneo preámbulo, he de decir que hoy comparezco en nuestra Revista ALCANTARA a requerimientos de su Director, para hacer acto de presencia, una vez más, en el polémico e inconcluso tema del Tránsito Tajo-Segura, en el que los avatares de la vida me instauraron en protagonista, papel que asumí con serenidad y sin temor.

El trasvase es una larga historia que se inicia hace más de 40 años con el proyecto del Ingeniero Lorenzo Pardo, y unas veces dormido, otras somnoliento y las menos despierto, ha permanecido vivo y latente en los legajos del Ministerio de Obras Públicas, hasta que en 1968 el ministro Silva se dispone a desempolvarlo con el decidido propósito de realizarlo.

Por entonces, soy Procurador en Cortes de representación Familiar por la provincia de Cáceres, elegido por sus Cabezas de Familia y Mujeres casadas, con votación lucida y destacada, lo que estimulaba mi obligación y mi vocación de servir sus intereses, aun a costa del sacrificio de los míos; por lo que no lo pensé dos veces y ponderando la oportunidad, quise, sin desmayos ni reservas mentales, dar la medida de mi amor y consagración a esta querida provincia.

Sinceramente creo, que entre las virtudes irrenunciables del político han de hallarse, el valor, la paciencia y la tenacidad, procurando ser activo, pero sin medir la eficacia de su labor por unidad de tiempo, sino por sus definitivos resultados, y sabiendo que a unos corresponde clamar y a otros inaugurar la obra terminada.

Este pensamiento me hace recordar, que cuando después de tres años y medio de presidente de la Diputación cacereña, en 1967 renuncié a continuar, en conversación mantenida con el ministro Alonso Vega, que no veía con buenos ojos mi dimisión —que en verdad fue debida a mi constante idea de la temporalidad de los cargos públicos, unida a mis deseos de reintegrarme a mi despacho profesional tan abandonado—, me preguntó cómo iba a dejar sin terminar y sin inaugurar obras de tanto interés para la provincia, promocionadas y conseguidas por la Corporación Provincial durante mi Presidencia, tales como la Universidad Laboral Hispano-Americana, el Hospital Psiquiátrico de Plasencia, el Plan de Caminos Provinciales, las del Colegio de San Francisco, el Colegio Menor Do-

noso Cortés, las Viviendas del Patronato Provincial, nacido en aquel entonces, etc.; y al contestarle que confiaba en que quien me sucediera se hallaría animado de las mismas ilusiones y sin duda daría fin a lo que con tanto amor se había comenzado, se limitó a reconvenirme en son de amenaza: «No te invitarán a la inauguración de ninguna». Así fue. El futuro se encargó de darle la razón, con excepción de la de la primera fase del Hospital Psiquiátrico, a la que asistió el propio ministro y fui invitado por mi excelente amigo Fernando Gutiérrez Martí, por entonces eficaz y competente presidente de nuestra Diputación.

La moraleja que se obtiene no es otra, que la de que los cargos políticos han de ser servidos con la voluntad y el pensamiento proyectados hacia el bien comunitario, y una vez concluida la misión temporal que realizaste, sin otro tipo de nostalgias, quédate sólo con la satisfacción del deber cumplido o con la insatisfacción de su incumplimiento.

El ministro Silva empieza el trasvase a través de la información pública, creo que en 1968, abierta mediante resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas —modesta fórmula para tan ingente obra—; aunque desde su comienzo era decisión irrevocable del Gobierno llevarla a cabo, y de ser posible sin la intervención de las Cortes; no porque creyera que pudiera dificultar la obra, pues ya sabemos que en todos los sistemas políticos, sin excepción, el Gobierno cuenta con una mayoría disciplinada en los Parlamentos, que además de no ser obstáculo para sus proyectos, supone condescendiente apoyo. El único temor es el del retraso que los trámites obligados comportan.

Dedicué mi atención, desde aquel instante, al estudio exhaustivo de lo escrito en España y en el extranjero, concretamente en revistas especializadas, sobre tan magna obra, llegando a la honesta convicción de que no era realización óptima para la Economía nacional, aparte de la negativa proyección que habría de tener en las provincias de la Cuenca del Tajo.

Presenté, en unión de mi compañero en las Cortes, Paco Gómez Lozano de Sosa, que siempre me acompañó hasta cesar en su actividad parlamentaria, reclamación en el período de información pública.

Más tarde formulé al Gobierno una serie de preguntas, de denso contenido y de difícil contestación, de las que se desprendían los inconvenientes y dificultades del trasvase, la carencia de estudios económicos y sociales, la falta de atención a los acuíferos subterráneos del sureste español, la escasa consideración sobre la nula incidencia de los productos horto-frutícolas que pretendían potenciarse con el trasvase, en la Economía exterior y por consiguiente en nuestra balanza de pagos; las dificultades que implicaría ofrecer una masa de agua a unos terrenos sedentarios, sin industrializar y comercializar su producción; el coste desorbitado de dichas aguas cuando regaran la vega murciana; y en definitiva el gravísimo daño que se ocasionaría a las provincias del Tajo y a la Economía Nacional, al verse privada de la posibilidad de volcar las aguas de este río en nuestros terrenos aptos para inmensas praderas, con las que conseguir producción cárnica bastante con que abastecer parte del mercado europeo, que tan necesitado está de oferta de tal naturaleza.

No se me contestó, más que con ambigüedades que virtualmente no decían nada, aunque bien se encargó la Prensa nacional de magnificarlas y de privar a la opinión del conocimiento de mis preguntas, que no publicaron a pesar de mis insistentes reclamaciones ante sus directores. Y en verdad que su negativa estuvo más inspirada en su autocensura que, en imposición del Gobierno. En cambio la Prensa regional —«Hoy» y «Extremadura»— acogieron en sus páginas tanto las preguntas como las contestaciones.

Convencido de que el trasvase era decisión gubernamental irrevocable, tratando de obtener el máximo beneficio para las provincias del Tajo, presenté enmienda al Proyecto de Ley sobre el Segundo Plan de Desarrollo, con la que conseguí que la Ponencia Informativa, la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno y más tarde el Pleno de las Cortes, incorporasen a aquella disposición, un artículo 17 que imperativamente ordenaba al Gobierno regular por Ley el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, en el que se contemplaran las acciones y obras a realizar en las provincias del Tajo, como fórmula compensatoria de los perjuicios sufridos, aunque sólo lo hubieran sido en el orden emocional y afectivo.

Así nació la Ley 21/1971 de 19 de junio, tan comentada y manipulada, que si bien no es la óptima, hay que reconocer, que de ser aplicada con buena voluntad por la Administración —anterior o actual— conseguiría el resurgir cacereño, incrementando nuestra producción a niveles insospechados, y sobre todo si se realizan con extensión y amplitud, los

que hasta entonces —y después— se mostrarían más radicales opositores al proyecto. Las palabras de Trillo-Figueroa, a pesar de las inevitables y lógicas retenciones que levantarían, de alguna forma desarticularían el primer intento de organización colectiva para defender el derecho prioritario que sobre las aguas del Tajo tienen las provincias ribereñas.

Derecho que Toledo, otra de las provincias damnificadas, se había apresurado a poner en la balanza no menos de cinco meses antes, gracias en parte a su mismo gobernador civil, Thomas de Carranza, colocado en un difícil equilibrio inestable, y a su Diputación pro-



Brañas, presidente de la Diputación, y Serrano Pino, que sustituyó a Julián Burgos en la alcaidía de Plasencia.

vincial, cuya moción al respecto, de 20 de febrero de 1967, se hizo llegar a todos los municipios toledanos y a la Diputación provincial cacereña.

Gracias a tal moción ha de darse la Diputación de Cáceres por oficialmente enterada del proyecto. Así se hace constar en las actas de la sesión celebrada el 30 de marzo:

«Concluida la lectura de una comunicación de la Excelentísima Diputación provincial de Toledo y de un escrito de don Fernando Bravo y Bravo, vecino y abogado de Cáceres, en relación con el anunciado trasvase de las aguas del río Tajo al Segura, la Corporación acordó que el anuncio del indicado pro-



regadíos locales preconizados sólo para nuestra provincia, que transformarían la faz de nuestros pueblos.

En honor a la verdad, puedo proclamar frente a las ligeras e irreversibles acusaciones de ignorantes atrevidos, que no obstante mi tenaz e insistente lucha, nunca fui advertido ni presionado para cesar en ella; pues sólo recuerdo que al presentar una de las numerosas enmiendas en las que intervine sobre el particular, a través del gobernador de Cáceres cierto miembro del Gobierno me rogó que la retirara, a lo que me negué, sin más problemas.

En otra ocasión, después de un debate en la Comisión de la Presidencia del Gobierno, sobre el trasvase, en el que tuve discrepancias y enojosos incidentes con el presidente de la Comisión, señor Bau, ostentando entonces el cargo de Delegado Nacional equivalente a Director General, comuniqué a mi ministro lo ocurrido diciéndole que en su bolsillo llevara siempre mi dimisión, por si al examinarse en el Pleno del Gobierno mi postura, se vertiera algún comentario que así lo aconsejara, a lo que me contestó Fernández Miranda que de plantearse, él siempre me defendería, pues mi posición crítica al trasvase y la defensa de los intereses de mi provincia, las realizaba desde mi escaño parlamentario como Procurador en Cortes. Nadie dijo nada y no hubo necesidad de mi defensa.

Relato estas anécdotas descubriendo verdades que hoy se adulteran fácilmente, en medio de un ambiente propicio al apasionamiento y a operar dialécticamente con esquemas, muchas veces erróneos y desacertados.

Verdad es que se comenzaron algunas obras, pero no lo es menos que los sucesivos Gobiernos han ido injustamente demorando la ejecución de esta Ley, sin que se vislumbre en el horizonte cambio de actitud que dé alas a la esperanza y a la ilusión; pero lo cierto es que el instrumento legal existe y el derecho a insistir y a no desmayar en el intento está reconocido por el legislador, por lo que, si vivimos en un Estado de Derecho, obligado es que el Poder Ejecutivo dé exacto cumplimiento a la Ley y no trate de desvirtuarla, cual se viene haciendo durante ocho años consecutivos, con retrasos culpables e injustificados pretextos.

Muchas fueron las reclamaciones que se hicieron al Gobierno por conducto de las Cortes; muchas son las que deberán hacerse a través del Congreso y del Senado, pero ¡por favor!, no abandonen tan noble empresa.

Sírvanos de ejemplo el de la Universidad de Extremadura, compartida por ambas provincias, tan denostada entonces y tan alabada hoy como nexo o puente de unión, que consolide el incipiente e inmaduro espíritu regionalista, en las futuras generaciones, que han tenido y tendrán la gran oportunidad de reunirse y conocerse en las aulas universitarias.

Fueron muchos los desvelos para conseguirla, pues aún dentro de la Cortes, hubo una Ponencia que pretendió arrebatarla por fútiles obsesiones procesales, sobre los que hubo de hacer una oposición formal y rigurosamente jurídica, que dio al traste con tan perjudicial pretensión.

Busquemos en la alianza y en la unión el bienestar colectivo; pues difícilmente se logrará, si los intentos en conseguirlo son sistemáticamente obstaculizados por los adversarios políticos, sin otra razón que la animosidad y el entorpecimiento del éxito del contrario.

yecto, hecho público por el excelentísimo señor ministro de Obras Públicas con motivo de su viaje por tierras de Murcia, había sido conocido con anterioridad por nuestro gobernador civil, a quien informé sobre el particular el ilustrísimo señor director general de Obras Hidráulicas y desde aquel momento hasta el instante actual, la autoridad provincial ha venido mostrando un gran interés por obtener para la provincia de Cáceres las mayores seguridades respecto de que las aguas del Tajo, en su curso por la provincia, no sufran merma en su capacidad, aunque el trasvase se efectúe algún día, habiéndose prometido como segura e inmediata solución, la de que el Gobierno de la Nación, a propuesta del ministro de Obras Públicas, acordaría la terminación del proyectado túnel de derivación del pantano de Valdecañas al Campo de Arañuelo para la irrigación de sus tierras, ofreciéndose toda clase de garantías de que no sufriría el caudal del río disminución apreciable que pudiera originar una pérdida para las posibilidades del porvenir provincial.

«No obstante ello, la Corporación hace suya la preocupación de nuestra primera autoridad provincial y de la Diputación de Toledo y del señor Bravo, acordando el propósito de dirigirse al excelentísimo señor ministro de Obras Públicas, en respetuosa solicitud de que se garantice a la provincia de Cáceres la ejecución de los proyectos que aseguren la irrigación de sus tierras, o al menos aquellas que sean susceptibles de regadío, entre las que se hallan la de Campo de Arañuelo, y asimismo que las aguas del Tajo, durante su curso por la provincia de Cáceres, no sufran merma en su caudal, al objeto de evitar los perjuicios que para su economía agropecuaria y de fuerza hidráulica pudiera representar lo contrario, pues no en vano las esperanzas de la provincia se cifran en la utilización de dichas aguas a expresados fines, preocupación que tenemos el convencimiento que habrá sido considerada y atendida por dicho Departamento Ministerial antes de decidir el trasvase de aguas al Segura».

«Estando anunciada una próxima visita a esta provincia del excelentísimo señor ministro de Obras Públicas, la presidencia promete dar cuenta al señor gobernador civil de este acuerdo, para que una vez más las autoridades provinciales ratifiquen sus deseos sobre el particular».

Firman el acta de esta sesión Palomino Mejías, Fernández Fernández, Galavis Gordillo, Reina Villado, Borja Bravo, Peña Recio, Madrugá Lozano, Navarro Iglesias, Grande Felipe, Elviro Remedios, Puig Megías, Manzano Andradá, Hurtado Simón, Cruz Sagredo, García García, Torres González y García

del Camino, faltando únicamente la firma del diputado Martínez García, que justificó su ausencia.

Sesión reveladora del ánimo de entrega que hubo casi desde el primer momento en los estamentos oficiales de la provincia, tan remisos a darse por enterados de la cuestión y tan contentadizos que, como única contrapartida para una no expresada oposición corporativa, se contentan con que se den vagas seguridades y con que se hagan al fin los regadíos de Valdecañas, que ya en 1959 habían sido declarados de interés nacional y destimados en 1963.

LOS SILENCIOS Y LOS ULTIMOS PATALEOS

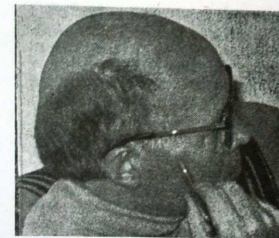
El 15 de abril de 1967, a petición propia, cesa Martín Palomino Mejías como presidente de la Diputación Provincial, cargo del que había tomado posesión el 21 de septiembre de 1963. Le sustituye Manuel Brañas Martínez, produciéndose al día siguiente el relevo de algunos de los miembros de la Corporación, la cual, con Brañas Martínez al frente, queda completada por Serrano García, Díaz Domínguez, López Gil, Galavis Gordillo, Hurtado Simón, Borja Bravo, Durán Durán Garlito Antúnez, Navarro Iglesias, Madrugá Lozano, Blanco Corisco, Gutiérrez Macías, Elviro Remedios, Puig Megías, García del Camino, Mora Jiménez, Rubiales Hidalgo y Casares Muriel.

Es esta la Corporación que con fecha 30 de junio otorga la medalla de Oro de la provincia a Izarra, nombrado gobernador civil de Murcia, y recibe a Trino-Figueira, cuya característica dulgencia, como se le reconoce en sesión conjunta de los Consejos Sindicales de Empresarios y Trabajadores, no tardaría en hacerse sentir, sobre todo entre quienes hubieran querido llevar más allá su oposición al trasvase.

Pasa el resto de 1967 y, contrariamente a lo que estuvo ocurriendo en Toledo, donde todo fue un ir y venir de ministro y directores generales, evidente intento de cortar la riada de acuerdos y comunicaciones de casi todos los entes públicos toledanos, en Cáceres diríase que nada pasaba, que nada pasaría y que lo del trasvase de las aguas del Tajo se lo llevaría el mismo viento que se llevó los regadíos de Valdecañas. Y con el mismo silencio.

Sólo unas cuantas personas, pocas, auténticos «guerrilleros» de la oposición al proyecto, se mantienen en la difícil y dificultada oposición. Menos son todavía quienes se atreven a llevar a la tinta impresa de los periódicos su actitud crítica.

Hasta el 30 de noviembre de dicho año no vuelve a tratarse oficialmente el tema del trasvase en el seno de la Corporación provincial. Se hace a instancias de Elviro Re-



opinion

Más que política

Por Antonio Aradillas

Fue suficiente recientemente que alguien descubriera que, entre las incontables partidas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1980 se encontraba una de unos cuantos millones de pesetas destinados a realizar algunos estudios en orden a la posibilidad del trasvase del Ebro a Cataluña, para que como un solo hombre se levantara toda la región aragonesa, manifestando su radical rechazo ante tal eventualidad. Aún más, todos sus políticos, prescindiendo de cualquier disciplina de voto de partido, y aun en contra de las planificaciones de quienes hoy están en el poder, gritaron sus aragonismo, oponiéndose a que se iniciaran —o prosiguieran— los estudios para que las aguas del padre Ebro emigraran un día a Cataluña a seguir engordando el desarrollo de aquel ente autonómico, en lógico perjuicio para el desarrollo de la región aragonesa. De momento, y no sólo gracias a la reconocida tozudez maña, sino gracias también a los argumentos aducidos y a la decisión política de sus representantes comprometidos con los intereses de su propia región, la partida destinada en los Presupuestos Generales del Estado para facilitar el posible trasvase, tendrá que ser empleada para otras atenciones. Aún más, ha comenzado a circular la idea de que está en estudio la viabilidad de un trasvase del Duero al Ebro, a la altura del pantano soriano de Gormaz, por el río Jalón, con lo que, en el caso del trasvase del Ebro a Cataluña, al río aragonés se le compensarían las pérdidas de sus aguas con las procedentes del Duero, no habiendo, hasta el presente, levantado la voz los castellanos-leoneses ante la programación de expolio semejante.

Teniendo en cuenta estos datos recientes, y después de comprobar la inocua reacción de nuestra región extremeña, y de quienes políticamente la representan —o dicen representarla—, a propósito del importantísimo acontecimiento de la llegada del agua del Tajo al Segura, uno llega a sentir una pena infinita por haberse consentido tal empobrecimiento regional, sin que a nadie se le haya ocurrido ponerle crespones negros a la bandera extremeña en los edificios públicos y privados. Partiendo del convencimiento científico de que los pueblos —regiones, países o nacionalidades— que dispongan el día de mañana de agua y de energía serán los más ricos, consentir con los brazos cruzados que las aguas emigren a otras regiones, descalifica a los gobernantes y a los mismos pueblos que lo han consentido sin apenas manifestar su protesta o sin que ésta haya sido percibida en todo el ámbito nacional.

Y conste que con esto Extremadura no se juega sólo el presente, sino el futuro que, por cierto, no es nuestro, sino de nuestros hijos. Y conste que no merecen fiabilidad alguna las promesas de las obras de compensación programadas por la Administración en conformidad con la ley del año 1971 y de las que en la provincia de Cáceres sólo se han realizado el tres por ciento de las mismas, sin que haya indicios de que las demás habrán de hacerse algún día. Y conste que el agua que se nos llevan a Murcia no le sobra a la cuenca del Tajo, susceptible de ampliar mucho más sus regadíos en conformidad con el antiguo «Plan de Aprovechamiento Integral del Tajo y de sus afluentes», pero que de aquí en adelante no podrán ampliarse, limitándose su capacidad industrial por falta de agua...

En cualquier región española este hecho resultaría impensable, si esa región no fuera la nuestra, tan secularmente olvidada. Resulta increíble que una región como la nuestra, a la cola de todos los índices de desarrollo y cuyas posibilidades realmente autonómicas son más que discutibles por falta de medios, le esté financiando la autonomía a la región valenciana, murciana y a parte de Andalucía oriental, proporcionándole el agua que es el elemento básico para cualquier desarrollo, ahora, pero, sobre todo, el día de mañana.

Somos pobres los extremeños, pero no de recursos naturales. Lo somos de recursos políticos y humanos y esto ha conseguido que calgamos irreversiblemente, de aquí en adelante, en pozos de pobreza, porque hemos dejado que nuestro principal recurso —el agua— vaya a enriquecer otras tierras —pronto autonómicas—, cuyos productos no sólo competirán con los nuestros, sino que serán únicos en los mercados nacionales e internacionales, porque no pudieron ser regados en nuestras propias tierras.

«El Ilustrísimo señor presidente explica detenidamente las gestiones que se están realizando actualmente en nuestra capital, añadiendo que más adelante se tiene la intención de formular objeciones al proyecto y, en el supuesto que se estableciera la necesidad de llevar a cabo el trasvase, se están estudiando las peticiones que habrían de formularse al Gobierno en compensación a los perjuicios que mencionado trasvase produciría a la provincia de Cáceres, terminando por indicar que se tiene la intención de realizar visitas a los departamentos ministeriales implicados en el problema e incluso al propio Jefe del Estado», dicen las actas de la sesión ordinaria celebrada en el mencionado día.

Inminente la apertura del periodo preceptivo de información pública a que había de someterse el propósito tan atado y bien atado, el 29 de febrero de 1968, Trillo-F.

—Llevo más de un año afirmando que no se trata de realizar un metro trasvase de agua —diría Silvio Muñoz el 1 de marzo a los visitantes cacereños—; no se trata de vestir a nadie a costa de otro. No podíamos incidir en el mismo error del año 1933, porque ello implicaría perjudicar a alguna provincia, mientras que ahora no pretendemos sino, juntamente con la consecución del equilibrio de ambas cuencas, promover el desarrollo de una y otra, del cual el trasvase del Tajo al Segura es sólo una pieza.

El mismo que en un acto celebrado en Montehermoso reafirmaría poco después:

—Quiero decirlos que el ministro de Obras Públicas tiene la mirada puesta en Cáceres, una de aquellas que forman parte, junto a otras regiones españolas, del aprovecha-

A INFORMACION PUBLICA, ¿PARA QUE...?

Este último gambeteo de Oñate ocurría cuando ya se había abierto el plazo de información pública, que empezó el 3 de marzo y se alargaría hasta el 10 de mayo.

«Información pública —así rezaba en el B. O. E. y en el de la Provincia, éste con fecha 5 de marzo— del anteproyecto general del aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sudeste de España, del que forma parte el anteproyecto general del acueducto Tajo-Segura».

O sea, a información pública el canal mondo y lirondo y sin nada de lo que haría del proyecto un «aprovechamiento conjunto», como las fuentes oficiales se obstinaban y se siguen obstinando en calificar al expolio. Canal del trasvase, que supondría, a mal ojo de buen cubero, una inversión de 6.543 millones de pesetas y cuya consecuencia última, según el anteproyecto, buen ojo de mal cubero, sería que el agua trasvasada y regando las «sedientas tierras del S. E. español» saldrían por la irrisoria cantidad de 1'34 pesetas por metro cúbico.

En «Cuadernos para el Diálogo»
Vicente de Miguel y Diego, escribe
al respecto:

«Con razón se duda de estas cifras, pues se calcula en 1.000 millones el coste de las obras e instalaciones para el bombeo del caudal del Tajo que debe ser trasvasado al Segura, cuando el bombeo para el abastecimiento de agua a Madrid con un caudal seis veces menor ha costado 2.000 millones de pesetas, según señala «El Economista» del 6 de abril de 1968.»

La agencia «Europa Press», por su parte, advertía que «los redactores del anteproyecto del trasvase Tajo-Segura estiman inicialmente el coste de las obras en 6.500 millones de pesetas pero consideran que esta cifra tiene un carácter preliminar debido, en gran parte, a que el estado de definición de las obras es todavía insuficiente para que sobre él pueda fundarse un estudio detallado de los costes».

¿Y qué, si en definitiva se dijera lo que se dijera, dijeran lo que dijeran los casi setenta mil escritos originados por el tema, el resultado estaba decidido de antemano?

Oposiciones de tanto peso específico como las de la Cámara de Comercio de Toledo, la Cámara de la propiedad urbana de Toledo, el Colegio de Farmacéuticos de Toledo..., ¿para qué?

En Cáceres, pataletas aparte, interesados silencios y mordazas y algunos gritos que se escapaban de la misma mordaza, cabe destacar la sesión extraordinaria celebrada por la Diputación Provincial el día 2 de mayo, todavía fiesta de la Independencia y ocho días antes de que se cerrara el plazo de la información pública.

Asisten a ella y firman sus actas Brañas Martínez, Serrano García, Díez Domínguez, Galavis Gordillo, López Gil, Grande Felipe, Garlito Antúnez, Borja Bravo, Durán Durán, Elviro Remedios, Blanco Corisco, Madruga Lozano, Navarro Iglesias, Puig Megias, Casares Muriel, Hurtado Simón, García del Camino y Gutiérrez Macías.

Apenas abierta la sesión se incorpora a ella, en calidad de presidente nato, Federico Trillo-Figueroa (quien no mucho antes, en el edificio de la entonces Jefatura Provincial del Movimiento y para gozo de algunos jóvenes pertenecientes a la Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, Hurlado Ricafort entre ellos, había afirmado que su pancarta encabezaría la manifestación de oposición al trasvase si ello fuera preciso).

Trillo-Figueroa, naturalmente que sin pancarta, explica al Pleno «los motivos que han inducido al Ministerio de Obras Públicas, así como al Gobierno, a llevar a cabo este proyecto, pero poniendo de relieve que nunca ha existido la idea de beneficiar a una región española en perjuicio de otra».

Además, «estima que no es justa la postura de partir de cero ante la cuestión del trasvase, por cuanto el Gobierno de la Nación ha realizado obras de importancia en nuestra provincia y cree que todo estriba en llegar a determinar si la Diputación, como órgano representativo genuino de la provincia debe oponerse, a secas, al proyectado trasvase, o ha de considerar la conveniencia de diálogo para llegar al aprovechamiento conjunto de las cuencas del Tajo y Segura».

«Insta, por último, a los señores diputados a que mediten con toda ponderación la actitud que deben adoptar por cuanto considera el actual momento como muy crítico y favorable para conseguir el desarrollo de nuestra provincia en todos los órdenes».

Y cumplida su misión abandona el salón de sesiones, no consta si entre grandes aplausos.

La moción presidencial, elaborada en base a los datos e informes de Canalejo Mateos, Muriel Jiménez y Martín Javato, comienza con los números de la evolución demográfica sufrida por la provincia entre 1950 y 1966, dieciséis años en el transcurso de los cuales la densidad de población ha bajado de

275 habitantes por kilómetro cuadrado a 24%. Las evoluciones de la renta y la producción por habitante tampoco son datos para el optimismo. En renta, entre 1962 y 1966 Cáceres ha bajado del puesto 47 al 50, en el cual sigue. En producción, de estar cuarenta puntos por debajo del promedio nacional, se ha pasado a distar cuarenta y siete.

«El proceso de empobrecimiento de la provincia de Cáceres, acelerado por las transferencias de capital y de población activa —sigue la moción— lo consideramos no sólo manifiestamente injusto desde un punto de vista social, sino falto de lógica económica, tanto a corto como a largo plazo».

Arremete contra el I Plan de Desarrollo, que prometió poco y cumplió menos (lo cual no será óbice para que el 5 de agosto de 1968 se inicie expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la provincia en favor de Laureano López Rodó, Gregorio López Bravo y Adolfo Díaz-Ambrona) y pone de relieve el impacto causado en los hombres de la Alta Extremadura el anuncio del traspase: «Bien podemos afirmar que jamás ha estado nuestra pro-

vista ya de treinta mil hectáreas en Valdecañas y diez mil en Torrejón, sino la superficie omitida por falta de estudio e información de terrenos situados en la margen izquierda del Tajo, de quince mil hectáreas».

«Cuando por interés nacional, cuando para beneficiar a la Comunidad se causa perjuicio a un tercero, se le indemniza justamente», afirma la moción y pasa a precisar las obras que reclama.

Carreteras del Estado de Nueva
Construcción: Coria - Plasencia-Na-
valmoral, Trujillo - Autopista Bada-
joz - Valencia del Cid, Brozas - Ali-
seda - Puebla de Ovando, Alía - Cas-
tilblanco, Coria - Zarza la Mayor-
Termas de Monfortiño, Yuste por
Almaraz y Valdecañas a Guadalupe

Modernización, ampliación y acondicionamiento de la N-521, Trujillo - Cáceres - Valencia de Alcántara; la N-523, Cáceres - Badajoz; la N-630, Gijón-Sevilla; la N-110, Soría-Plasencia; la N-513, Hervás-Portugal por Hoyos y Valverde del Fresno; la C-526, Puente de Guadancil-Ciudad Rodrigo; la C-713, Gualupe - Navalmaral - Jarandilla; la C-401, Toledo-Mérida por Guada-

el presupuesto general de industrias y de los embalses de Valle
muñal, Benjón, Alencara y Pitalito, los canales precisos
para elevar los rios a fin de hacerlos.

1.ª. La Junta Provincial de Ponce, muestra
 una vez más, su adhesión al Gobierno del Consello, no opo-
 niéndose al anteproyecto general del Ayuntamiento. Segura es-
 ta Junta, siempre que el proyecto se refiera, se ha-
 ga consistir en elementos que sirven para mejorar: a. el
 uso al que se destinan los terrenos de la Corporación; b. el
 uso, y demás, que este sea regulado por ley por el
 Gobierno, y c. el uso de los terrenos de la Corporación
 para el uso de la Junta Provincial de Ponce.

Jefe de la actual Diputación ante mí, en el hecho que
 asistió a la lectura del estudio valiente, por lo tanto se consi-
 dera el estudio en sí mismo lo que se trata de se presentarse
 en forma al antipropósito del que se ha mencionado en el
 estudio del caso; figura, todo lo que se ha mencionado en el
 como en otros muchos ocasiones, en el estudio del caso.
 según el estudio, de acuerdo a lo que se ha mencionado en el
 de la Nación; pero de otra parte, se ha mencionado en el
 de la Nación, de acuerdo a lo que se ha mencionado en el

vincia tan preocupada y unida por un problema común. Quizá, porque jamás hasta ahora, ha tenido que enfrentarse con una situación tan grave como la que se deduce del estudio del anteproyecto».

Considera la moción presidencial que debiera haber salido a información pública la totalidad del anteproyecto y no únicamente la relativa al acueducto y expone algunos de los males que a la provincia causará el trasvase, que viene a comprometer gravemente zonas de posible riego, «no sólo la zona pre-

lupe; la C-525, Cáceres-Alcántara; la C-501, Plasencia-Candeleda; la C-520 Cáceres-Medellín; y la C-512. Coria-La Alberca... Construcción de los accesos a Plasencia y Cáceres y atención especial a la red de caminos vecinales.

En lo tocante al tema ferroviario, además de la variante Casar de Cáceres - Cáceres, la construcción de nuevas estaciones en Plasencia y Navalmoral de la Mata.

Se pide un estudio urgente de las posibilidades nacionales —?— de regadío de la provincia y la ejecución



de cuanto dicho estudio aconseje realizar, así como la urgente terminación de las obras planificadas en las zonas del Gabriel y Galán, Borbollón y Rosarito y que se acelere el desarrollo de las obras para la puesta a punto de treinta mil hectáreas en Valdecañas. También se reclama un plan para dotar de aguas y saneamiento a los núcleos urbanos de la provincia que carecen de ambas cosas o las tienen de forma insuficiente.

Que se declare a la provincia zona de preferente localización industrial agraria; que se activen las concentraciones parcelarias solicitadas; que se lleve a cabo la ordenación rural de las comarcas de Hervás y Campo de Arañuelo; que se incluya a la provincia en el Plan de Promoción Ganadera, previsto para el S. E.; que se creen y mejoren pastizales en las zonas ganaderas; que se repueblen cuarenta mil hectáreas de pinos y eucaliptus; que se termine el Mapa Agronómico de Cáceres; que se incremente la electrificación rural...

Y que se haga el Mapa Geológico y Minero; que se lleve a cabo el Plan Provincial de Electrificación; que se reconsidere la posibilidad de una fábrica de cemento en Aliseda; que se declare a la provincia zona de preferente localización industrial y se creen polígonos industriales en Cáceres, Coria, Navalmoral y Plasencia; que se instale una fábrica de celulosas...

En Educación, Facultades Universitarias y Escuelas de Ingeniería Técnica, Escuelas-Hogares, docientos escuelas de párvulos, ciento cincuenta para alumnos de doce a catorce años, Institutos de Enseñanza Media o Secciones Delegadas...

Confía plenamente la moción en las promesas del ministro de Obras Públicas, pero afirma que sólo una ley reguladora podrá garantizar el principio de justicia, ley en la cual han de quedar recogidas «las indemnizaciones que en justicia deben otorgarse a nuestra provincia» y plasma sus conclusiones en ocho puntos, el último de los cuales, resumiendo de todos ellos, dice:

«La Diputación Provincial de Cáceres, muestra una vez más, su adhesión al Gobierno del Caudillo, no oponiéndose al anteproyecto general del Acueducto Tajo-Segura como obra técnica, siempre que en el proyecto definitivo, se haga constar claramente que dicha obra representa una sola vez... el Aprovechamiento Conjunto de las cuencas del Tajo y Segura; y, además, que éste, sea regulado por la Ley que recoja detalladamente todas las acciones y circunstancias presentes en estas conclusiones».

Hubo intervenciones de varios miembros de la Corporación, «poniéndose de manifiesto el criterio unánime de que no se trata de for-

opinion

Trasvase de agua y trasvases de voluntades

Por Pedro Cañada



La primera sensación que tengo al tratar el tema del Trasvase del Tajo al Segura, es la de bochorno y vergüenza como político y como extremeño, al ver cómo se consume impunemente una injusticia contra el pueblo que me eligió para que defendiera sus intereses. Vergüenza y bochorno, porque contemplo impotente cómo se lleva a efecto con la mayor tranquilidad, sin que se haya levantado un clamor unánime de todos los partidos, que recogen sus votos en nuestra tierra, sin que el pueblo cacereño haya explotado en un grito de rebeldía con un ¡¡Basta!! lleno de consecuencias.

Me pregunto qué hubiera ocurrido si este desaguisado se hubiera intentado cometer con Cataluña o el País Vasco ¿Se hubiera podido llevar a cabo?

Creo que la respuesta sobre, por evidente. Pero si esto es así, ¿qué pecado hemos cometido los cacereños para que se nos trate de esta forma? ¿Será nuestro silencio, nuestra atonía, nuestra pasividad, la que nos hace cómplices y por tanto culpables? Ya sé que el trasvase se gestó en una época en que todo se hacía sin contar con el pueblo y en la que el hablar resultaba peligroso. Sé también que algunas voces valientes desafiaron el peligro. Pero el silencio, la falta de compromiso de los partidos, de cualquier signo, la falta de unión de los políticos, nuestro silencio como pueblo, nuestra pasividad, en un momento en que se podía hablar, nos descalifican ante cualquier otra protesta, por cualquiera otra injusticia que se cometa con nosotros. Cualquiera que lo intente podrá hacer leña de este árbol de Extremadura, pues nadie se lo va a impedir. El campo está abonado para colonizadores, para saqueadores, para arribistas, para cómplices de la venta.

La obra del trasvase del Tajo al Segura se engendra, es un engendro de la dictadura, pero el parto o el aborto ocurre en la democracia. Y ocurre además con prisas, para cumplir promesas electoralistas. Como contrapartida para Cáceres, ni las promesas ni la ley se cumplen. La última promesa consiste en la realización de un 17 por ciento de lo que se concede por ley para 1971, a 11 años de la misma, en 1982. Es otra promesa, otra promesa más.

Pero aunque nos hubieran dado auténticas compensaciones y aunque se hubieran realizado antes que el trasvase, es algo demasiado serio para jugar con ello. No se trata de «derechos históricos», sino de un patrimonio natural, que no puede ser vendido ni expropiado. No se puede vender la geografía, ni el medio ambiente. No se puede hipotecar el futuro de un pueblo para dárselo a otro, ya favorecido por la naturaleza y por el Estado. Pero aquí se cumple el mito del bandido generoso, que roba al rico para dar al pobre, sólo que al revés.

¿No hubiera sido más racional y equitativo poner al lado del mar una de las centrales nucleares que nos han impuesto a los extremeños y desalinizar el agua, que hubiera cubierto todas sus necesidades, sin limitación alguna?

IRRACIONALIDAD

Esta obra faraónica ha sido calificada de irracional y de puro intento de conseguir prestigio político, que se cubre de gloria cuando se calculan los costos de ese agua trasvasada. El metro cúbico de agua no costará menos de 30 pesetas. ¿Qué producto puede ser competitivo con un precio del agua tal? A no ser que ese precio lo paguemos entre todos

fular una negativa al anteproyecto del aprovechamiento conjunto de las cuencas del Tajo y Segura, toda vez que la provincia de Cáceres como en otras muchas ocasiones, ha dado muestras y debe seguir dándolas, de ayudar y labrar el engrandecimiento de la Nación...

Y CONSUMATUS EST

Trillo-Figueroa celebra por aquellos días del período de información su cuadragésimo octavo cumpleaños, recibiendo «la felicitación de gran número de autoridades, personalidades y fuerzas vivas, que pusieron de relieve las simpatías y afecto con que cuenta el ilustre hombre público». («Hoy», 11 de mayo de 1968), quien en el transcurso de la celebración, después de oír los pipros que le dedican Díaz de Bustamante, Brafias Martínez, Palao, Galindo Casellas, Puig Megías, Bonilla Lapuerta, Palomino Mejías y Llopis Ivorra, afirma que no le pesa haber venido a Cáceres aun contando con las dificultades del momento.

Dificultades, bien es verdad, que sólo le crea un sector muy concienciado de la opinión pública, pequeños grupos o brillantes personalidades, los cuales no siempre, más



bien pocas veces, logran acuerdos oficiales de repulsa al proyecto. Se oponen la Cámara de Comercio, la Federación provincial de Asociaciones Familiares...

En total, contando con los que

llegaron de Cáceres, desde cuyo Gobierno Civil se había obstaculizado en varias ocasiones la expresión de opiniones públicas y hasta corporativas, a la información sobre el anteproyecto acuden casi cincuenta y nueve mil escritos, a saber de verdad cuántos de oposición y cuántos de aceptación. Silva Muñoz, padrino directo de la idea, dijo en las Cortes que más de cincuenta y tres mil habían sido favorables al anteproyecto. A Trillo-Figueroa, aquí en Cáceres, los más osados, los que llegaron a suponer que su postura estaba condicionada por su pasada condición de presidente de la Mancomunidad de Regantes de Taivilla, le dijeron que había falseado la opinión del pueblo cacereño.

En fin, que Cáceres, si se opuso, no supo o no quiso o no pudo oponerse hasta las últimas consecuencias. Y el anteproyecto, como estaba previsto, fue dado por bueno.

Y aquí pasó lo que pasó entre el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento y algunos alcaldes más bien incómodos, que le dijeron a Trillo-Figueroa lo que creyeron en justicia que había que decirle y que dimitieron o les hicieron dimitir...

Y allá en diciembre, cuando todo o casi todo estaba consumado, el Cáceres oficial y reverencioso despidió con todos los honores al hombre que, tras cumplir sus objetivos, marchaba como gobernador civil de Burgos, desde donde quizá hasta pudo influir para que meses más tarde, como contraprestación por unas obras que sólo beneficiarían a la capital de la provincia cacereña y que eran pírrico pago al más o menos enfurruñado silencio, a instancias del concejal Ignacia Rivera, se otorgara la Medalla de Oro de la ciudad de Cáceres a Federico Silva Muñoz, promotor del expolio, quien pudo decir en Murcia, donde acaso no le hayan otorgado medalla alguna:

los españoles y el agua se regale. En ese caso, ¿qué maravillas no se podrían haber hecho en la cuenca del Tajo? Con el dinero que se ha gastado en el Trasvase hubiéramos duplicado la renta de nuestra provincia y quizás de todas las afectadas de la cuenca del Tajo.

UN DELITO QUE NO PRESCRIBE

Como en los delitos de hurto, no se perdona el pecado hasta restituir lo robado.

Desgraciadamente el pueblo extremeño no tiene la experiencia de la libertad para poder exigir justicia sin miedo. Han sido generaciones de opresión, de injusticia, de avasallamiento, de ignorancia e incultura, los que han creado en él hábitos casi de fatalismo. Pero un día este pueblo será libre. Será libre de incultura, libre de la opresión y del miedo, se liberará de los colonizadores y será dueño de su propio destino. Entonces el monstruo del trasvase aparecerá como un ser antidiluviano y el esqueleto resaca de sus acequias y acueductos, quedará para ser contemplado como símbolo de la irracionalidad y para vergüenza de los que lo consentimos.

LOS OTROS TRASVASES O EL SECUESTRO DE LA VOLUNTAD POLITICA

A veces me pregunto: ¿Qué significa Extremadura en el conjunto de la política nacional? ¿Qué significa para los cuadros dirigentes de los partidos? Me cuestiono también: ¿Para qué sirve ser parlamentario, ser representante del pueblo extremeño?

La respuesta, a partir de ciertas experiencias, raya en el desánimo, por no decir en algo peor. Tengo a veces la impresión, como en el caso de las autonomías, de que somos simple comparsa, el coro. Como instrumento de defensa de los intereses de los privilegiados, los destinados a sacrificarse siempre por el «bien supremo de la nación». Esta sensación de ser representantes de otras regiones o «nacionalidades», porque a ellas beneficiamos a pesar nuestras, me hace pensar que el trasvase del agua, quizás no sea más que la simple consecuencia de otros trasvases, el trasvase o el secuestro de nuestras voluntades políticas, en favor de lo que otros dispongan. Este es el peor de los trasvases y la raíz y causa fundamental de todos los demás.

El día que Extremadura sea dueña de su voluntad, será dueña de su destino y no habrá más trasvases. Yo lo espero de la generación que viene, de los hijos de la libertad por la cultura. ■

—En poco más de dos años hemos recorrido un largo camino, que va desde el proyectismo a la realidad, de la potencia al acto, y vosotros sabéis el ingente esfuerzo que ha habido que desarrollar, pero ahí está la realidad: el acueducto Tajo-Segura ya está en marcha.

DE LA RESIGNACION A LA LEY DE APROVECHAMIENTO CONJUNTO

Ya estaba en marcha, si, el acueducto. Un Consejo de ministros celebrado el 21 de febrero de 1963, había autorizado la totalidad del gasto para llevar a cabo el trasvase. Lo había aprobado a pesar de

caudal dos veces mayor que el del río Júcar; ello prueba que la solución no es utópica.

«Otra solución es la desalinización del agua del mar, cuyo coste se estima que en 1974 será equiparable al del agua terrestre y en 1978, antes de que se terminen las obras del trasvase Tajo-Segura, ya será más barato. Esta solución presenta, además, la ventaja de que en lugar de mermar los recursos hidráulicos, los acrecienta».

Se puso en marcha aquello que se llamaba oficialmente «aprovechamiento conjunto», pero en una sola dirección y a gran velocidad («Comprendálo, esto es una cosa ministerial, están muy ilusionados. Es mejor que no digamos nada».



Trillo Figueroa, en un acto

que en «Cuadernos para el Diálogo» Vicente de Miguel y Diego había escrito que «nadie sabe quién va a pagar esta obra, y cómo», advirtiendo de paso que «no señala dónde están las 150.000 hectáreas que se van a regar» e insistiendo, como algunos otros, «La Vanguardia» entre ellos, en la irremediabilidad del proyecto y en la mejor solución que hubiera sido el aprovechamiento de los caudales subterráneos o la desalinización del agua del mar.

«Una de ellas —de las soluciones alternativas— es la del aprovechamiento de los caudales subterráneos estimados por la Dirección General de Obras Hidráulicas en un volumen de 7.000 millones de metros cúbicos, que superan en mucho al que se pretende trasvasar del Tajo. Esta solución tiene indudables ventajas en el aspecto financiero, pues, a diferencia de las obras de trasvase, las inversiones se realizan a medida que son necesarias y posibles sin necesidad de acudir a cuantiosos desembolsos iniciales. En el País Valenciano se extrae por este procedimiento un

que había confiado el gobernador civil de Toledo, Thomas de Carranza, a uno de los opositores toledanos al expolio) y sin que los ordenados intentos de la clase política de entonces parecieran obtener más que una vaga promesa de vez en cuando.

Miles de millones, muchos más de los previstos y dichos, empezaron a fluir para hacer realidad el trasvase, en el cual trabajarían las empresas Dragados y Construcciones, Construcciones Civiles, Ferrovías, Hidroconstrucciones, Agrominas, Obras y Servicios Públicos y Corsán, «que han encontrado un chollo que nunca pudieron esperar», según aventura «Interviú» el 11 de agosto de 1977, quien también, al hablar de las soluciones alternativas que pudieron llevarse a cabo, dice que «el agua subterránea cuenta con inconvenientes insalvables: no hay grandes obras para las grandes empresas».

LA ENMIENDA DE MARTÍN PALOMINO

El 13 de noviembre de 1970, Pa-

lomino Mejías, procurador en Cortes por el tercio familiar desde 1968, es entrevistado para «Extremadura» por Enrique Baltar, a quien confiesa que se había sentido solidarizado con las inquietudes y prevenciones de la colectividad cacereña y que, pese a lo intentado anteriormente por él y por Gómez Lozano de Sosa, también procurador en Cortes, no habían logrado respuestas satisfactorias del Ministerio de Obras Públicas, aunque habían confiado en que el término «aprovechamiento conjunto» sería respetado al fin.

—Tal confianza —confiesa Palomino a Baltar— se vio defraudada al conocer el Proyecto de Ley enviado por el Gobierno a las Cortes para regular el II Plan de Desarrollo, en el que, si bien continuaba hablándose del Aprovechamiento Conjunto, lo cierto es que en los Anexos del Proyecto, sólo se contemplaba la construcción del acueducto, sin comprender ninguna obra o mejora en la provincia de Cáceres.

Ante «la gravedad de dicha situación», sigue diciendo Palomino Mejías, redacta y presenta una enmienda a la Comisión de Leyes Fundamentales para que «en garantía de que todas las provincias de la cuenca del Tajo, que se incorporara a la Ley aprobatoria del Plan de Desarrollo un nuevo artículo que estableciera, que dicho Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura se regulara mediante una Ley proyectada a ese único propósito y en la que se indicaran las necesidades de las provincias afectadas y los estudios y obras que habría que realizar en las mismas».

Gracias a esta enmienda, el 15 de enero de 1971, casi dos años después de comenzadas las obras del acueducto, aparece en el «Boletín de las Cortes Españolas» el proyecto de Ley de Aprovechamiento Conjunto.

En él se insiste en que en la primera fase y hasta tanto no se hayan realizado las obras complementarias de regulación de la cabecera del Tajo, no podrán trasvasarse los mil millones de m³ previstos y, en lo que se refiere a la provincia cacereña, se prevé la construcción de una estación depuradora de las aguas residuales de la capital y la programación de las obras a realizar en primera fase por el Consorcio Provincial de Abastecimientos y Saneamientos. Condicionados a estudios de viabilidad, se citan los regadíos del Alamo, del Jerte, del Bronco, de Torrejón y Portaje del Alamo y del Salor, y de Valdecañas, «así como el potencial de regadíos locales».

Proyecto de ley que comenzará a debatirse en la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno de las Cortes Españolas el subsiguiente 27 de abril y que en su sesión inicial es presidida

momentáneamente por el nuevo titular de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora:

—Vamos a hacer —diría— la operación quirúrgico-hidráulica más importante que se haya hecho sobre territorio nacional, y que espero sea precursora de la grande y definitiva, que será el trasvase del Ebro.

La ponencia la componen Emilio Lamo de Espinosa, Carlos Mendoza, Baldomero Palomares, Manuel Rivas Gaudillas y José Luis Torroba. Habla en nombre de todos el primero de los citados:

—El hecho de poner una Ley de nota en sí una clara intencionalidad: la de que la Ley sea una garantía, una prueba de claridad y un instrumento de autolimitación del propio Gobierno al servicio de la seguridad jurídica de los intereses de la cuenca del Tajo.

Con pocas diferencias sobre el texto previsto y realmente importante sólo la que dice que «los estudios de viabilidad serán informados por la Diputación y Consejo Económico Sindical de la provincia respectiva», se llega al final.

En nombre de la Comisión, Lamo de Espinosa y Enriquez de Navarrete concluye:

—Sólo me resta, señores procuradores, pasar a la responsabilidad de estas Cámaras el dictamen para que se eleve a Ley, en la certeza de que se ofrece a sus señorías la oportunidad de dar el asentimiento a la realización de una obra que ha de servir al desarrollo socioeconómico de España, sin perjuicio para nadie, con garantía plena para los derechos legítimos, y que ha de ser recibida en el Sureste español con la más ilusionada esperanza, pues es una prueba de que el Gobierno y las Cortes velan por su engrandecimiento, como velan y se afanan por el engrandecimiento y desarrollo de todas las regiones españolas...

—Señores procuradores —pregunta el presidente de la Mesa—, ¿se aprueba el dictamen relativo al proyecto de Ley de Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura?

Pues claro que se aprueba. Con una sola abstención y diez votos en contra.

Ya teníamos la Ley 21/71 de 19 de junio, que el «B.O.E.» publica al día siguiente y que es uno de los papeles más mojados que hayan caído sobre la provincia de Cáceres.

LA TRAMPA DE LA LEY

El acueducto, ya comenzado antes de que se aprobara la llamada «Ley de Aprovechamiento Conjunto», siguió tragando millones, muchos más millones de los que inicialmente se habían presupuestado, como no podía dejar de suceder con un proyecto al que se dio luz verde sin haberlo ni estudiado ni desarrollado hasta el fin y sin que

documento

Texto de la Ley 21/71 de 19 de junio

El artículo diecisiete de la Ley uno/mil novecientos sesenta y nueve, de once de febrero, de aprobación del II Plan de Desarrollo Económico y Social, ordena la regulación, mediante Ley, del sistema hidráulico Tajo-Segura.

En primer lugar y para mayor garantía de los distintos usuarios de la cuenca del Tajo, que no han de ver mermadas sus posibilidades de desarrollo por escasez de recursos hidráulicos, como consecuencia del trasvase, debe confirmarse que no podrán superar la cuantía de seiscientos millones de metros cúbicos, hasta que las obras complementarias de regulación de la cabecera del Tajo, previstas en el anteproyecto general del trasvase, garanticen la existencia de excedentes por encima de aquellos seiscientos millones de metros cúbicos.

El artículo segundo, contemplando la posición de los usuarios de la cuenca del Júcar, sujeta la utilización del embalse de Alarcón a un estricto régimen de entradas y salidas, estableciendo una adecuada composición de la correspondiente Comisión de Desembalses, con el fin de vigilarlo al efecto dispuesto y cuantos problemas conexos puedan suscitarse.

En ejecución la totalidad de las obras del acueducto deberán programarse y, en su caso, realizarse el resto de las obras hidráulicas en la cuenca del Tajo y en las áreas afectadas por la traza del propio acueducto, que integran el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, según se comprende en la presente Ley.

Finalmente se establece que los gastos correspondientes a los estudios y obras que se desarrollen como consecuencia de la presente Ley se imputen a los créditos comprendidos en los Planes de Desarrollo Económico y Social.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Artículo primero.—Uno. De acuerdo con las orientaciones del anteproyecto general de aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sudeste de España, y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, en una primera fase podrán ser trasvasados a la cuenca del Segura, y hasta un máximo anual de seiscientos millones de metros cúbicos, caudales regulados excedentes procedentes del río Tajo.

Dos. En una segunda fase, y realizadas aquellas obras de regulación de la cabecera del Tajo y afluentes que sean necesarias, y previa información pública por plazo de tres meses, podrá ampliarse la derivación con caudales del mismo origen que resultaren excedentes, teniendo en cuenta las necesidades que se deriven de lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto de la presente Ley, hasta un máximo de mil millones de metros cúbicos.

Tres. Los caudales que en virtud de esta Ley quedan afectados al trasvase son exclusivamente aquellos a que se refieren los dos párrafos anteriores.

Cuatro. Para el cómputo de los caudales excedentarios del párrafo segundo se tendrán en cuenta, además, las exigencias de caudal de los aprovechamientos actualmente existentes, cualquiera que sea su origen.

Cinco. En todo caso se respetará el contenido de los actos jurídicos establecidos por la Administración con los usuarios afectados, así como aquellos que puedan establecerse al amparo de la presente Ley.

Artículo segundo.—Uno. La utilización del embalse de Alarcón en el acueducto Tajo-Segura seguirá un régimen estricto de entradas y salidas, computándose las pérdidas por evaporación que puedan corresponder a las aguas trasvasadas.

Dos. La Comisión de Desembalses de Alarcón, ampliada a tal fin por representaciones de las Confederaciones Hidrográficas y Comisarias de Aguas del Tajo y del Segura, entenderá en cuantos problemas se presenten con respecto a lo dispuesto en el párrafo anterior, bajo la directa dependencia de la Comisión Central de Desembalses.

se supiera a ciencia cierta cómo podría realizarse y cuánto costaría en definitiva.

«Silva no se lo pensó dos veces —se escribiría años después en la revista «Blanco y Negro»— y propuso con urgencia la construcción del trasvase en un nuevo proyecto que difería notablemente del planteado por Lorenzo Pardo. Con más prisa que seguridad en los datos, y sin estudios previos que afianzaran la necesidad de tal obra, se puso en marcha el «aprovechamiento conjunto Tajo-Segura», que en dos años quedaría finalizado y llevaría riqueza al Sureste español...»

También años después, más mordaz, la revista «Interviú» afirmaría que «el trasvase Tajo-Segura se ha convertido en el mayor escándalo de las obras públicas del Régimen» y, en apoyo a las voces que de alguna forma lo habían advertido, señala que «la presencia de agua subterránea es tan evidente que ha constituido precisamente la mayor dificultad para la realización del trasvase. Apenas se puede seguir con éste porque el exceso de agua —todo un mar interior— lo impide. En perforar el túnel se han perdido ya varias vidas humanas. Se ha perdido un «topo», máquina perforadora sofisticadísima cuyo precio es superior a los cien millones de pesetas...»

Pesetas, muchos millones de pesetas para el llamado «aprovechamiento conjunto». Millones de pesetas gastados únicamente en el acueducto y nada o casi nada en lo que habría de aprovechar a las provincias ribereñas del Tajo, a las explotadas, para las que la mayor parte de lo previsto en la ley estaba sujeto a unos estudios de viabilidad pertinentes —la trampa de la ley, de quien hizo la ley y la trampa—, una coartada para demorar indefinidamente el tema o para pasárselo, con la responsabilidad y más o menos de tapadillo, a quienes debían informar dichos estudios: Diputaciones y Consejos Económicos Sindicales, que a la postre vendrían a encontrarse con que habían vendido lo invendible a un comprador infiable y en base a un contrato inservible.

DESDE EL ESPIRITU DEL 12 DE FEBRERO

Termina el año 1973 con la muerte de Carrero Blanco y podría decirse que 1974 se abre con el discurso programático de Arias Navarro, «espíritu del 12 de febrero», que se llamó, apenas un suspiro que desató verdaderos huracanes.

Fernández Miranda ha quedado descolgado del nuevo Gobierno, y Martín Palomino, que durante años había desempeñado un alto cargo en la Secretaría General del Movimiento, vuelto a Cáceres, recoge el mauler cada día de más amplia base y menos amordazado y se decide a interpelar al Gobierno acer-

Artículo tercero.—Uno. Quedan incluidas e integradas en el aprovechamiento conjunto regulado por esta Ley las siguientes obras, que serán programadas por los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura en las esferas de sus respectivas competencias.

— Las de terminación de la transformación en regadío de las zonas de Alagón, Castrejón, Canal de las Aves, Real Acequia del Jarama, Estremera, Sacedón y Auñón.

— La construcción de las estaciones depuradoras de las aguas residuales de Alcalá de Henares, Madrid, Aranjuez, Toledo, Talavera y Cáceres.

— La construcción de los embalses de cabecera del Tajo y afluentes que resulten necesarios para completar los excedentes a que se refiere el artículo primero.

— La construcción y establecimiento de puentes, pasos y servidumbres que permitan comunicar ambas márgenes de la traza a cielo abierto del acueducto Tajo-Segura, para la normal explotación de las fincas afectadas y permitir el adecuado tránsito viario, sin que como media supere los dos pasos por cada tres kilómetros de canal.

Dos. La misma consideración alcanzarán todas aquellas que se considere procedente incluir en los programas de inversiones públicas, a la vista de los estudios de viabilidad pertinentes y que corresponden a:

— El recrecimiento de la presa de Cazalegas y ampliación de regadíos del Alberche.

— Las que resulten necesarias para la conservación de niveles del Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.

— Los regadíos del Ambroz, del Jerte, del Bronco, de Torrejón-cillo y Portaje, del Almonte y del Salor, y de Valdecañas, así como del potencial de regadíos locales en la provincia de Cáceres.

— Los regadíos del Tiétar y Guadyerbas, así como los regadíos de Azután, La Sagra y Torrijos, en la provincia de Toledo.

— Del embalse de la Tajera y de los nuevos regadíos del Tajuña, del Henares, del Jarama medio, de Priego, Cañete y Landete. Del Zancara, Cigüela y Riansares y del Júcar, en la provincia de Cuenca.

— Las del saneamiento de las zonas del Zancara, Cigüela y Riansares.

— Las de los recursos hidráulicos totales de la Mancha.

— Las de regulación de la cuenca alta del Jarama, mediante los embalses de La Cabrera, El Atance, La Bodera, Alcorlo, Cantaloja, Pozo de los Ramos, Beña, Matallana y Bonaval.

— Las de la canalización de los ríos Lezuza y Don Juan.

Los estudios de viabilidad serán informados por la Diputación y Consejo Económico Sindical de la provincia respectiva.

Los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, en la esfera de sus respectivas competencias, dispondrán lo necesario para que los estudios a que se refiere este artículo estén ultimados, o en ejecución, antes del comienzo del III Plan de Desarrollo.

Artículo cuarto.—Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, por el Ministerio de Obras Públicas se procederá a la programación de los siguientes estudios y obras:

— Obras a realizar en primera fase por el Consorcio Provincial de Abastecimientos y Saneamientos de Cáceres.

— Ampliación del abastecimiento y saneamiento de Toledo y su polígono industrial, con utilización, si procede, de los recursos del río Algodor, así como los de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo.

— Abastecimiento que será mancomunado en la medida conveniente para una mejor explotación futura de los pueblos afectados por el embalse de Buendía.

— Abastecimiento de las poblaciones afectadas por la traza del acueducto Tajo-Segura.

— Abastecimiento y saneamiento de la ciudad de Albacete.

— Estudio de la construcción del viaducto de cola del embalse de Buendía.

— Terminación urgente de la presa de Tous, en su primera fase.

— Estudio del canal de riego de la margen derecha del Júcar.

Artículo quinto.—Uno. Los estudios y proyectos a los que se refieren los anteriores artículos tercero y cuarto de la presente Ley y dos del Decreto novecientos dos/mil novecientos sesenta y nueve, de nueve de mayo, por el que se aprueba el texto refundido del II Plan de Desarrollo Económico y Social.

Dos. A estos efectos de determinar la viabilidad de las nuevas

ca de lo que hay y no hay para Cáceres del «aprovechamiento conjunto».

Su interpelación aparece en el «Boletín de las Cortes Españolas» en los primeros días de mayo de 1974 y rescuita la apagada oposición al trasvase del Tajo, también mampara para la oposición al mismo Régimen.

Afirma Palomino en su interpelación que nada se ha hecho de la estación depuradora de las aguas residuales de Cáceres, «no obstante su necesidad, tanto para la depuración de las aguas de la parte urbana de la ciudad, que podrían ser conducidas hacia el río Guadiloba, como para la de las zonas industriales —?— que podrían serlo hacia el río Salor...»

Los previstos planes de regadío, sujetos por la trampa de la ley a los estudios de viabilidad pertinentes, los examina uno por uno.

De los del Ambroz, dice que, a pesar de que los estudios de viabilidad habían sido informados favorablemente por la Diputación y a pesar de que el Decreto 680/1973 de 15 de marzo habla de potenciar la comarca de Las Hurdes, «en la que pueden tener una importancia agro-social destacada los regadíos del Ambroz», ni la zona ha sido declarada de interés nacional, «ni se ha redactado proyecto tendente a la ejecución de tales obras».

Afirma no saber que «se hayan proyectado y menos ejecutado obras conducentes a la realización» de los regadíos del Jerte y que ni siquiera se han encargado los estudios de viabilidad para los del Bronco, que afectarían a Santibáñez el Bajo, Ahigal, Aceituna, Pozuelo, Villa del Campo...

Sigue diciendo de los regadíos de Torrejón-cillo y Portaje, en la denominada zona regable de la ribera de Fresnedosa y que beneficiarían los términos municipales de Cachorrilla, Pescueza, Portaje, Portezuelo y Torrejón-cillo, que a pesar del informe favorable de la Diputación y de que habían sido declarados de interés nacional, «las obras no han comenzado e ignoramos cuándo empezarán».

Nada se sabe igualmente, sigue Palomino, acerca de los regadíos del Almonte y del Salor, plan de riegos

zonas regables en la cuenca del Tajo y su rentabilidad no se computarán los incrementos de coste respecto a los que hubieran resultado sin el trasvase Tajo-Segura.

Tres. Los gastos que ocasione la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley, en la parte que al Estado corresponda, se imputarán a los créditos presupuestarios correspondientes a los programas de inversiones públicas de los Planes de Desarrollo Económico y Social.

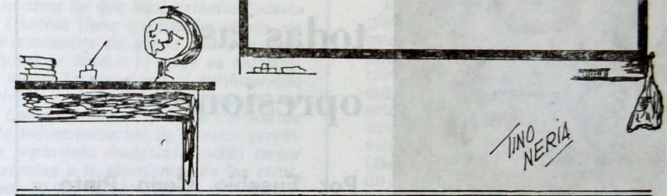
Dada en el Palacio de El Pardo a diecinueve de junio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes,

ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL Y NEBREA

Con el fin de evitar sorpresas desagradables en los exámenes Se comunica a todos que a partir de la fecha el Río TAJO desemboca en el Mediterráneo.



de la margen izquierda del Tajo, con 50.000 hectáreas repartidas entre Arroyo de la Luz, Sur de Cáceres, Las Torres, Monroy, Torrejón el Rubio y Torrecilla de la Tiesa. La viabilidad fue favorablemente informada por la Diputación, pero «ignoramos a estas alturas cuál haya sido la decisión de la Administración».

Da como no insinuado el plan de regadíos locales, no ya los 800 previstos en el «aprovechamiento conjunto» y que pondrían en riego 70.000 hectáreas, sino los 62 que habían sido declarados de interés nacional y que transformarían únicamente 4.000 hectáreas, «con gravísimo perjuicio para la provincia de Cáceres y consiguientemente para la economía nacional».

Finaliza Palomino su enumeración de lo que está a la sazón sin hacer, casi lo mismo que hoy, haciendo constar la lentitud del Ministerio de Obras Públicas en sacar a subasta los abastecimientos de agua y saneamientos previstos en el artículo 4 de la «Ley de Aprovechamiento Conjunto».

«¿Cuándo se dará cumplimiento por la Administración —pregunta el procurador— al programa de acciones y obras que las Cortes Españolas, con la sanción de S. E. el Jefe del Estado, incluyeron para la

provincia de Cáceres y demás provincias de la cuenca del Tajo, en la ley 21/71 de 19 de junio...?»

Pregunta también si el Gobierno entiende que las obras previstas para las provincias ribereñas deben realizarse simultáneamente con las del trasvase y, en caso contrario, cuál será el orden de prelación y finaliza rogando la máxima celeridad en la realización de todo aquello que por ley debería dársele a la provincia de Cáceres.

LAS PETENERAS DEL GOBIERNO

Pocas veces, al menos en los últimos lustros, ha estado el pueblo cacereño tan expectante como lo estuvo en las semanas que siguieron a esta interpelación de Palomino Mejías. Pocas veces, al menos en el Régimen anterior, habrá tenido un político cacereño tanta popularidad como la que Palomino alcanzó gracias a su interpelación.

Las respuestas del Gobierno, demoradas más allá de lo reglamentario, llegan a finales de julio del mismo año. Llegan para llenar de estupor a los cacereños y quizá de sonrojo a quienes habían condicionado su no oposición a unas compensaciones encubiertas en el eufemismo de «aprovechamiento conjunto».

Con respecto a la estación depuradora de aguas residuales de Cáceres dice el Gobierno a Palomino que sí, que ya está redactado el anteproyecto y que si no se ha redactado el consiguiente pliego de bases para proceder a su contratación, se debe a que ni la Diputación ni el Ayuntamiento han elegido el lugar donde habría de emplazarse.

En lo que toca a los previstos regadíos, recuerda el Gobierno el condicionante de los estudios de viabilidad pertinentes y pondera la magnitud de la inversión que los mismos precisan. Así.



opinion

El trasvase como esparadrapo de todas las opresiones

Por Eusebio Cano Pinto

Visto desde Cáceres, el Trasvase Tajo-Segura no es sólo el Trasvase; el Trasvase es el Trasvase y su circunstancia.

Esta acomodación orteguiana a este complejo de cemento y agua, expolios y faraonismo franquista, y que a primera vista pudiera parecer una estupidez soberana, viene a cuento porque hoy es imposible analizar con rigor el tema del Trasvase sin someter al mismo tiempo al microscopio sus alrededores; esto es, enmarcarlo en la realidad socio-económica de Cáceres. Y es que la bola ha rodado tanto y tanto, y tantos han sido también los mercados de ocasión que la han empujado que ni siquiera parece ya bola y si embolado.

Decir pura y simplemente que el Trasvase constituye el gran expolio histórico provincial es una mentira matemática o, cuando menos, una friolera ética. La desinformación existente al respecto y la agitación interesada de siniestros personajes de la vida pública provincial y nacional han creado un estado de opinión tal sobre el Trasvase que lo han convertido en punto de confluencia de todas nuestras opresiones. También ha habido pescadores de río revuelto que han querido canalizar sus propias culpabilidades y sus ineptitudes de gestión pública hacia la resignación del pueblo cacereño ante esta obra de la Dictadura.

Y nadie ha tenido la bastante valentía para levantar la máscara y afirmar sin temblor que el Trasvase y su manipulación han sido convertidos en ocasión y pretexto para descubrir la represión histórica provincial a todos los niveles. Ocasión y pretexto, pero de ninguna manera su causa.

(Vaya por delante, y para evitar hipótesis e intencionadas perversiones de este artículo, que quien lo firma se ha declarado públicamente y se declara furibundo dinamitero del Trasvase; pero a lo que no quiere contribuir en un épico es a que se siga habilitando esta faraonada franquista como esparadrapo social que cubra y justifique toda la injusticia estructural que Cáceres padece y que ha padecido siempre).

Expolios mayores hay y ha habido en Cáceres que han hecho derramar menos tinta y que, por supuesto, nos han robado más agua. Ocasión incitado a la guerra santa. La reserva artificial de agua más importante de España va a engordar con kilowatios convertidos en pesetas la cartera de una familia cuyo apellido a los cacereños debería producirnos náuseas. ¿Quién habla hoy de Alcántara si no es de su puente romano, y por qué la ira del pueblo casi nunca se dirige hacia sus auténticos explotadores?

Que el Trasvase Tajo-Segura ha sido mal enfocado desde Cáceres lo prueba el hecho de que aquí presumiblemente nadie hubiera protestado si las compensaciones prometidas en la Ley del 71 hubieran sido pre- vias o, al menos, estuvieran ya ultimadas. ¿Es que con compensaciones en regla y abundantes el Trasvase dejaría de ser un expolio provincial? Porque no hay que olvidar que las compensaciones, y en cualquier hipó- tesis, no dejan de ser más que limosnas que debieron darse no en re- mendo gesto primario de justicia por parte de un régimen que de Cáceres nunca se acordó.

Y ahora que el Trasvase es buena leña para hacer hogueras donde se quemen los bonzos; ahora que incluso un cierto sector de cacereños ve-

«Y no solamente es necesario considerar el coste inicial de las obras...», advierte, como si no se estuvieran echando ríos de millones en la parte del «aprovechamiento conjunto» de provecho para el Sureste español, «...sino los subsiguientes gastos de explotación, que, al resultar muy elevados, pueden hacer antieconómicos los regadíos...» que hubiera resultado una respuesta medianamente sensata y aceptable si lo mismo se hubiera dicho de los regadíos del Sureste antes de embarcarse en el trasvase.

Y pasa en seguida a detallar su postura ante los distintos planes de regadíos.

Sobre los del Ambroz, como «la relación beneficio/coste resulta lamentablemente inferior a 2 (1'57)», dice que «no resulta aconsejable su ejecución».

Sobre los del Jerte, que posibilitarían el abastecimiento de agua a Plasencia, afirma que todo está a punto para la rápida iniciación de las obras.

Afirma que aún no están acabados los estudios de viabilidad de los del Bronco y se extiende con respecto a los de Torrejón y Portaje, para decir de los mismos



Martín Palomino Mejías

que los estudios de viabilidad han resultado desfavorables. O sea, que nada.

Y nada de los regadíos del Almonte y del Salor, porque ya en junio de 1969 —es decir, dos años antes de que se incluyera su posibilidad en la «Ley de Aprovechamiento Conjunto»— el Centro de Estudios Hidrográficos había estudiado los suelos y los resultados eran «tan desconsoladores que ya no procedía ni tan siquiera a redactar el estudio de viabilidad». Item más, que algunos informes posteriores de la propia Diputación no eran favorables.

Da como casi hecha la primera fase del plan de regadíos locales, apenas 62, en lugar de los 800 de la «Ley de Aprovechamiento Conjunto» y «aunque el señor Palomino

rían con buenos ojos la colectiva dimisión de los cargos públicos provinciales para reivindicar la justicia a destiempo por este dislate del Estado contra Cáceres; ahora que el burro ya está muerto (y con perdón) habrá que decir a los que lo mataron y tal claman: que se quemen ellos y que dimitan los auténticos culpables, pero no los que ni arte ni parte han tenido en el asunto. ¿Dónde están, dónde, los arquitectos de un silencio provincial ignominioso que ha durado diez años y uno más, los que entonces hablaron del «nunca ponderado sacrificio de Cáceres para redimir la sed de España»? ¿No fueron ellos, por otra parte, los que por saber tan poca geografía ni siquiera sabían de dónde viene el agua que llena el Tajo cuando llega a Cáceres?

De repente se han dado cuenta muchos de que aquí estamos todavía en el umbral del desarrollo, de que Cáceres tiene muchas hectáreas sin regar y pueblos sin asfaltar y abastecimientos de aguas que construir. Y piensan que si esto no se ha hecho ni se hace... la culpa es del Trasvase. ¡Mentira pura! ¿Qué tiene que ver el Trasvase con el subdesarrollo estructural en que la provincia ha vivido y vive? Culpar al agua que se va a Murcia de la sed que tiene el Campo Arañuelo y otros campos de pan llevar o de las cotas africanas de industrialización de nuestra provincia es poco serio. Y tampoco es un argumento demasiado lúcido cargar las responsabilidades de nuestras carencias a la abundancia de los otros. Si la provincia de Cáceres no tiene hoy 50.000 hectáreas más de regadíos quizás se deba a otras razones de la mala fortuna y sobre las que ahora no hace al caso comenzar su exégesis.

Este es el mito. Y el espejo ante el que de hace poco para acá justificamos todas nuestras opresiones. El Trasvase, así manipulado, puede conducir a un gran resentimiento colectivo que termine involucrándonos en la desgana de asumir incluso nuestra propia soberanía. Los cacereños hemos desembocado una vez en el Atlántico en épocas de conquista; ahora nos quieren hacer desembocar en el Mediterráneo y a través de un túnel de cemento armado. Y hasta que nuestra energía no desagüe en un proyecto de convergencia interior quizás nos lleguemos a superar la conciencia freudiana de represión histórica.

Quizás muchos cacereños no han caído en la cuenta de que da igual —y salvadas las distancias sentimentales— que el Tajo desemboque en el Mediterráneo o en el Pantano de Alcántara. De otra manera: que el expolio provincial es igual de grande si el Tajo se va a dar agua a los apartamentos turísticos del señor Banús como si va a dar kilowatios (vía Alcántara) a las eléctricas de un inefable benefactor cacereño que todavía se apellida Oriol y Urquijo.

Estando como estamos ante un hecho irreversible (regalo por otra parte de un Plan de Desarrollo preletibico) y no teniendo la provincia suficiente dinamita para destruir el túnel de Talave (aparte de que algún gobernador civil se apresurara a enviar los antidisturbios) los cacereños deberíamos sacar cierta rentabilidad política del Trasvase y para no tropezar dos veces en la misma piedra. Rentabilidad política en el sentido de convertirlo en estandarte contra los nuevos explotadores que ya cabalgan por estos pagos; y al mismo tiempo, en la mascota contra la opresión del centralismo de un Estado que ha utilizado el empobrecimiento de unas provincias para engordar a las oligarquías capitalistas que lo sustentan y han sustentado.

no no hace referencia a ello», menciona la zona de regadíos de Valdecañas, donde ya «se ha construido el túnel de trasvase y domina- das 1.250 hectáreas desde el año pasado».

Recuerda el Gobierno que ha aprobado el proyecto y propuesta de adjudicación para poner en riego 1.300 hectáreas en el Alagón y que ha actuado, sin estar previstas, sobre 700 hectáreas más en Calzadilla-Guijo de Coria. Y «se han realizado importantes obras complementarias en los sistemas de riego del Alagón, Arrago y Rosarito» termina diciendo el capítulo de las negativas a los regadíos.

Sobre las obras a realizar en primera fase por el Consorcio Provincial de Abastecimientos y Saneamiento de Cáceres, el Gobierno reconoce que hay retrasos, pero no carga a que los proyectos, redac-

tados en general por los Ayuntamientos, no reúnen los requisitos precisos.

Una bofetada, en suma, para las expectativas cacereñas.

DE LAS PERPLEJIDADES, LAS INDIGNACIONES Y LOS SILENCIOS

La bofetada, que sonó como un pistoletazo, dejó boquiabiertos a muchos; a muchos de los que seguían creyendo que se había hecho bien al no mantener una oposición a ultranza al trasvase, como estaba ocurriendo por entonces en Aragón ante la amenaza de trasvasar aguas del Ebro a Cataluña. (Se hablaba, por cierto, de que Trillo-Figueroa sería nombrado gobernador civil de Zaragoza y no vendría mal recordar la canción que «La Bullonera» puso en circulación entonces y cuya letra decía: «El que quiera llevarse el agua/ y el trabajo de Aragón/ se las ha de ver primero/ con toda su población»).

Perplejidad en muchos e indignación en otros tantos. Una como descarga eléctrica recorrió la provincia, que quizá hubiera sacado provecho de su indignación, aún canalizada, sin el empeño, que haberlo lo hubo, de mantenerla con la boca cerrada.

Sólo un Ayuntamiento de la provincia, uno entre doscientos diecinueve, el de Hervás, tomó el acuerdo corporativo de protestar por las respuestas que el Gobierno diera a Palomino Mejías. Los demás, silencio.

—¿Y cómo vamos a protestar —que diría un alcalde de los de entonces, alcalde de un pueblo próximo a la capital y de los que se beneficiarían de algunos de los regadíos ahora negados—, si no nos lo ordenan...?



La prensa extremeña, ayudada en ocasiones por esporádicos artículos o comentarios que aparecían en los medios de comunicación de alcance nacional, fue tal vez la más aguda punta de lanza de la indignación cacereña ante respuesta como aquella, que el propio Palomino, entrevistado por García Morales, calificó de «equivocada, inoportuna e incongruente», fundada en «supuestos estudios de viabilidad, que con seguridad están basados en erróneos datos y falsas premisas».

La Diputación provincial, en entredicho por algunas de las respuestas del Gobierno, celebra Pleno extraordinario el 7 de agosto siguiente, y Camisón Asensio, en Informe de la Presidencia, se refiere al asunto.

«El señor Camisón —narran las actas— analiza los detalles de las respuestas comparándolos con la realidad de los hechos, poniendo de resalto que en ellas se destaca lo negativo y se silencia lo positivo. Así, por vía de ejemplo, sorprende que no haga referencia a los índices obtenidos de las estudiadas inversiones, que arrojan un saldo positivo y son superiores a las normativas».

«Se refiere a la amortización de las obras y surge la pregunta siguiente: ¿Por qué no se piensa en la amortización del acueducto Tajo-Segura?»

Pero lo más grave viene cuando el Informe de Camisón «se refiere seguidamente a otros aspectos, como rentabilidad, precios etcétera, sorprendiéndose de que la contestación dada se contradiga con los Decretos del Consejo de Ministros, firmados por el propio Jefe del Estado, declarativos de interés nacional y urgencia diversos regadíos en nuestra provincia y que la respuesta no considera ni interesantes ni rentables. Por ello, se pregunta: ¿Cuándo se dice la verdad, cuando se contesta a un procurador o cuando se declaran de interés nacional ciertos regadíos en la provincia de Cáceres?»

Camisón Asensio informa al Pleno que se ha nombrado una Comisión, en la que se integra el Gabinete de Planificación de la Diputación, la Organización Sindical y otros estamentos, y que la misma realizará «un detenido y profundo estudio para decidir las acciones a desarrollar».

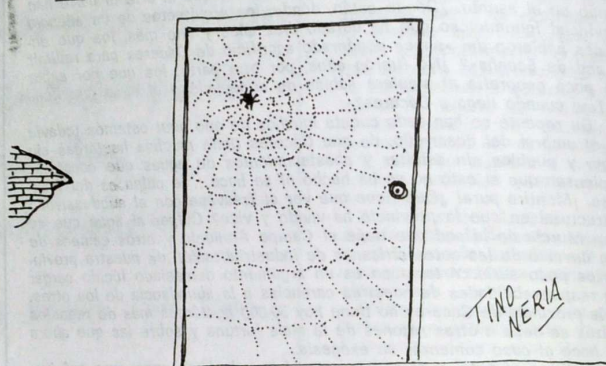
Y en eso se fue el verano, que entre otras cosas trajo a Extremadura la primera «guerra del tomate».

LA PROVINCIA PASA AL CONTRATAQUE

En septiembre, 30 de septiembre, día de toros de la feria septembrina de la capital, vuelve a reunirse la Corporación provincial, ahora en Pleno ordinario y en transcurso del cual se da lectura al estudio

TRASVASE TAJO-SEGURA

OFICINA de COMPENSACIONES



preparado por la Comisión que Camisón Asensio había anunciado meses y pico antes.

Dicho estudio hace una breve reseña del trasvase y de sus circunstancias, arrancando de las respuestas dadas por el Gobierno a la interpelación de Palomino Mejías y que han sido para la provincia «la mayor decepción experimentada en el devenir de los años transcurridos desde aquel 18 de julio de 1936 en que la provincia de Cáceres con su alineación a la causa del Movimiento Nacional prestó a éste un señaladísimo servicio», razón casi última muy utilizada por aquellos años, utilizada casi siempre que las demandas locales no encontraban eco en las últimas instancias del Poder.

Pondera «la tradicional generosidad cacereña, su solidaridad nacio-

nal bien acreditada, el espíritu de sacrificio de sus gentes, que conoce de privaciones y de desengaños, sin respuestas desairadas que conducen a situaciones conflictivas», como quedó de manifiesto cuando el Gobierno se empecinó en el trasvase y los cacereños «se limitaron a poner de manifiesto su situación deprimida y de alarmante regresividad...»

«Jamás nadie en estas tierras —dice más adelante el estudio— podría imaginar que aquellas acciones —se refiere a las previstas por la Ley 21/71, de 19 de junio—, cuyo cumplimiento y ejecución garantiza la norma, habían de quedar reducidas tan sólo a unos estudios cuya fiabilidad es materia yremate discutible...»

Y añade:

«En la contestación a que nos

venimos refiriendo se dice ya, en su preámbulo, que «en la provincia de Cáceres es muy avanzado el grado de cumplimiento del Plan». Si con ello se alude a las acciones contempladas en la Ley, la afirmación no puede ser más gratuita, por cuanto que ninguno de los regadíos previstos han sido iniciados y tan sólo se han concluido sus estudios de viabilidad, a excepción de los del Jerte y Bronco...», estudios, por otra parte, que según la Ley deberían estar concluidos o en ejecución antes del comienzo del III Plan de Desarrollo y donde se esgrimen «parámetros no contemplados comparativamente por el Gobierno para una y otra cuenca, tales como coste de inversión, gastos de amortización, gastos de energía eléctrica...»

Arremete contra los estudios de viabilidad esgrimidos por el Gobierno, «realizados por determinadas empresas consultoras designadas directamente por la Administración y sin intervención alguna de la provincia, con absoluta ignorancia, como antes se indica, de los informes elaborados por técnicos de organismos provinciales, al amparo de lo dispuesto por la propia Ley».

Hace ver errores de bulto en las respuestas del Gobierno, «tales como los de los criterios de clasificación de tierras, alternativas de cultivo, coste de las obras, en alguno de los casos innecesarias y precios de los productos —se fija en la del Ambroz el de 25 ptas/kg. de tabaco—, careciendo además de rigor técnico cuando como en los estudios de las zonas del Almonte y del Salor, se adoptan conclusiones con una sola calicata cada 1.847 hectáreas, que en algunos subsectores se eleva a una por 4.500...», y más adelante añade que R. Earle Story fija como límite superior admisible el de una calicata cada 400 hectáreas.

«De haberse observado mayor objetividad la relación coste-beneficio obtenida hubiera sido muy aproximada a la deducida de los exhaustivos informes elaborados a nivel provincial, que alcanzan 3'34 para la zona del Ambroz, 3'18 para la Ribera de Fresnedosa (Torrejónillo-Portaje) y 2'83 para la de la margen izquierda del Tajo».

Extraña al Estudio que al Gobierno le preocupe el gasto de energía eléctrica que conllevarían los regadíos negados a la provincia de Cáceres, que produce muchísima más de la que consume. «No parece, pues, muy lógico que se alude a este excesivo gasto de energía eléctrica por hectárea —3.600 ptas—, máxime si se tiene en cuenta que solamente en la estación de bombeo de Altomira, según datos que se deducen del Anteproyecto general de Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España, complejo Tajo Segura,

se prevé un consumo de 1.000 millones de Kwh./año, lo que supone un gasto de energía eléctrica por hectárea y año para regar en el Sureste del orden de las 20.000 pesetas».

Crítica la cautela que el Gobierno pone al Plan de Regadíos Locales, refrenados en parte por los Decretos 679 y 680 de 15 de marzo de 1973 y se teme que, si se acogen los criterios del Centro de Estudios Hidrográficos o de la Confederación Hidrográfica del Tajo, «este precepto sea tan inoperante como lo ha sido hasta ahora la propia Ley 21/1971».

Sobre el Consorcio Provincial de Abastecimientos y Saneamiento quiere la provincia dejar constancia expresa de «que no existe tal Consorcio provincial, al no haberse aprobado ningún documento que desarrolle bajo este régimen jurídico las obras de infraestructura sanitaria a realizar», y esto «por no haberles prestado su aprobación los Departamentos ministeriales correspondientes». De todas formas, la Diputación, por consejo de la propia Dirección General de Obras Hidráulicas, solicitó ayuda de la misma para las obras de abastecimiento, distribución y saneamiento en veinticuatro núcleos urbanos de la provincia y consiguió, ya en 1970, antes de la Ley del trasvase, que un Consejo de ministros estableciera el régimen de ejecución para tales obras, au-

xiliadas por el Estado con una subvención del 50 por ciento.

A pesar de ello, claro, nada se ha hecho «por la lentísima diligencia con que son acogidos los expedientes tramitados» y por las frecuentes devoluciones de proyectos, que «no lo son sino por causas meramente formales, susceptibles de ser corregidas de oficio».

En el capítulo que el Estado dedica a Programa de Acciones, Inversiones y Aspectos Sociales, se dice, entre otras cosas, lo siguiente:

«Las fabulosas cifras que para el trasvase se manejan, en las que no se pone tasa alguna a la hora de superar las dificultades que a diario surgen, y que contando tan sólo con las previsiones oficiales —15.869 millones de pesetas, según el programa de inversiones públicas de los Presupuestos Generales del Estado de 1.974—, hacen elevar a 528.973'33 pesetas el coste por hectárea transformada en el Sureste, contrastan notoriamente con las 82.969 pesetas a que resultan las del Ambroz, las 52.850 pesetas de las de Ribera Fresnedosa y las 128.854,30 pesetas de las de la Margen Izquierda del Tajo, que dedicadas preferentemente a cultivo de forrajeras y prateras, permitirían un gran incremento a la ganadería, de especial vocación en estas zonas, contribuyendo, además a remediar el déficit cárnico del país, al que se aliviaría de una innecesaria pérdida de divisas».

Suscríbase a

ALCANTARA

Revista al servicio de la provincia cacereña

Diputación Provincial
Plaza de Santa María, S-n.
CACERES



PUES A MI ME HA DICHO UN AMIGO MURCIANO, QUE TODA EL AGUA QUE RECIBEN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA, LA VAN DEVOLVIENDO A LOS EXTREMENOS DENTRO DE LAS LATAS DE CONSERVA QUE NOS VENDEN, ASI QUE NO SABE DE QUE NOS QUEJAMOS.

J. G. G. G.

Febbraio 1980

clarada de Interés Nacional por Decreto 680/1973, de 15 de marzo, aprobado en Consejo de ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, el 23 de febrero.

DE ENTONCES A ACA

Era el 30 de septiembre de 1974, un soleado día de toros de la feria septembrina de Cáceres. Y fue, quizá, el único momento en que la Corporación provincial cacereña plantara cara públicamente a un Gobierno del régimen surgido por cuenta de la victoria militar en la guerra civil de 1936.

Cáceres contuvo el aliento y más de uno puede que pensara: «¡Ahora sí!». Más de uno también quiso hacer el intento de elevar a niveles populistas el malestar que el desahucio gubernamental había provocado en los sectores más sensibilizados de la provincia.

En una tienda de modas, la de «Elpidio y Leo», concretamente, llegó a exhibirse un cartelón en el cual se leía:

«CACERENOS TCDOS,
VIVAIS O NO VIVAIS
EN NUESTRA PROVINCIA,
ES POSIBLE QUE EN MAS
DE UNA OCASION OS
HUBIERA GUSTADO HACER
ALGO POR NUESTRA
PROVINCIA; AHORA ES
EL MOMENTO EN EL QUE,
TODOS UNIDOS, NOS
SUMEMOS CON CARTAS Y
TELEGRAMAS AL ACUERDO
TOMADO POR LA EXCELENTISIMA
DIPUTACION PROVINCIAL
SOBRE LA RESPUESTA DADA
POR EL GOBIERNO A
NUESTRO PROCURADOR EN
CORTES
DON MARTIN PALOMINO.
ESTE PROBLEMA NOS AFECTA
A TODOS, DESDE LA PRIMERA
AUTORIDAD PROVINCIAL
HASTA EL HABITANTE MAS
PEQUEÑO DEL PUEBLO MAS
APARTADO DE LA PROVINCIA
DE CACERES»

«El cartelón, cuando hemos vuelto a pasar esta mañana —cuenta un periódico— había sido retirado. No hacen falta más comentarios».

Sobran, en realidad, todos los que al respecto se hicieron o intentaron hacerse, todas las fuerzas cívicas que hubieran querido sumarse a la reivindicación. Pronto el asunto quedó envuelto en las marañas del más desafortunado oficialismo, oficialismo más o menos triunfalista, que fue quitando hierro y ardor al justo resentimiento popular, tan fructífero como hubiera podido ser.

Y así, avanzando el mes de octubre siguiente, los periódicos locales daban la noticia de una reunión celebrada en Madrid, donde se había del plan inmediato de regadíos y abastecimiento de aguas a Cáceres.

documento

La actual corporación provincial frente al trasvase

Texto íntegro de la moción aprobada en sesión plenaria del 20 de junio de 1979

«Señores Diputados:

En la madrugada del día 16, según informaciones de agencias, que recoge la Prensa nacional, ha comenzado a funcionar de manera definitiva, el trasvase Tajo-Segura. El agua del río Tajo, nuestro río, desde dicho día, y ya de forma permanente se empieza a trasvasar al pantano de Alarcón, y de aquí al de Talave, para desde este último incrementar los regadíos del Sureste y resolver las necesidades de aquella zona en materia de abastecimiento de agua para regadíos, usos domésticos e industriales.

La Provincia de Cáceres —a la que Dios y la Naturaleza la dotaron de este río cuyo cauce discurre por su propia entraña en el mayor tramo de los que constituyen su curso español—, no puede permanecer impasible en este acontecer histórico en el que se consuma al fin el expolio de unas aguas que en modo alguno pueden reputarse como sobrantes, pues ni las necesidades de la zona donante han sido suficientemente estudiadas ni planificadas, ni ha habido el más mínimo interés por realizar en la provincia las inversiones que su desarrollo requiere, pero que en todo caso representaban, eso sí, la existencia de una riqueza potencial cuya pérdida para el futuro es ya una realidad.

Cabe a la Diputación, como único representante genuino de los intereses de la provincia, y en lugar primario, la responsabilidad de hacer llegar al Gobierno su más enérgica protesta por la consumación de la pérdida de unos bienes provinciales que en aras de un principio de solidaridad, mal entendida, no han tenido la obligada contraprestación.

En efecto, permitanme VV. SS. analizar en breve síntesis el desarrollo de este proceso. El 2 de marzo de 1968, por no remontarnos a fechas anteriores, se inserta en el «Boletín Oficial del Estado» el anuncio de la información pública del anteproyecto de aprovechamiento conjunto, que no comprendía más que el de las obras del acueducto o propiamente trasvase, única y exclusiva acción que se pretendía llevar a cabo; hasta que con motivo de las discusiones a que dio lugar la Ley aprobatoria del II Plan de Desarrollo de 11 de febrero de 1969, los Procuradores que a la sazón representaban a la provincia, consiguieron la introducción en aquélla del artículo 17, en el que se ordenaba la regulación mediante Ley del sistema hidráulico Tajo-Segura, cuando ya se habían suabastado los primeros tramos de la obra del acueducto.

Este fue, pues, el antecedente de la Ley 21/71 de 19 de junio, por el que se regula evidentemente el mal llamado aprovechamiento Tajo-Segura, en la que, con carácter general se establece en una primera fase la posibilidad de poder ser trasvasados a la cuenca del Segura hasta un máximo anual de 600 millones de metros cúbicos, y, en una segunda fase y una vez realizadas las obras de regulación necesarias, y previa información pública por plazo de tres meses, 400 millones más, y, con carácter privativo una serie de acciones a realizar en la provincia de Cáceres, preferentemente de nuevos regadíos, con especial signo compensatorio, cuales son los nominados por la Ley del Ambroz, del Jerte, del Bronco, de Torrejoncillo y Portaje (Ribera Fresnedosa), del Almonte y Salor (margen izquierda del río Tajo) y Valdecañas, así como el potencial de regadíos locales.

Desde entonces, y a lo largo de estos años, se han sucedido ininterrumpidamente las reivindicaciones corporativas y las gestiones parlamentarias a todos los niveles, con resultados contradictorios, respuestas evasivas y a veces a modo de «largas cambiadas», so pretexto de estudios insuficientes, falta de rentabilidad o acaso de razones ecológicas, que demuestran, o al menos a esa conclusión hemos de llegar lógicamente, el escaso interés por la provincia cacereña, cuya tradicional generosidad y solidaridad nacional tiene bien acreditada, así como del espíritu de sacrificio de sus gentes, que conocen de desengaños y de privaciones, obligadas en buena parte a un peregrinaje por otras latitudes en busca de un trabajo que aquí no pueden alcanzar porque los recursos provinciales siguen sin desarrollarse.

Entre tanto docenas de miles de millones de pesetas se invierten en las obras del acueducto, mientras que las frases: «La tubería del tras-

vase es una parte del aprovechamiento conjunto, que en cierto modo se supedita a todas las demás piezas de dicho aprovechamiento...» «No se trata, repito una vez más, de llevar agua de un sitio a otro, sino de regular los recursos hidráulicos de ambas cuencas, para buscar el desarrollo de una y otra que sin el aprovechamiento conjunto no será factible...» «Añado algo más, que el aprovechamiento conjunto es el título para dar una preferencia a la provincia de Cáceres», o «El Ministerio se vincularía en la realización de estas obras a unos plazos y ha de mantener continuos contactos con la provincia para que sea la propia provincia vigilante de las realizaciones que en ella se acometan por parte del Ministerio de Obras Públicas», frases que dichas por responsables de la política hidráulica no han quedado más que en simples frases, a la par que se daba cima a la obra del acueducto calificada ya en sus inicios, en alguna prensa nacional, como faraónica y que al juzgar ahora por otros medios informativos, «ha de despertar aún grandes polémicas».

Resulta claro que con las acciones realizadas hasta ahora no se ha posibilitado lo más mínimo el desarrollo de las provincias de la cuenca del Tajo, como pudiera deducirse del espíritu de la Ley reguladora del aprovechamiento conjunto, y si únicamente el de las de la cuenca del Segura, provincias por otra parte, y lo decimos sin el más ligero asomo de agravio, que ya gozaban en aquel entonces de un bienestar del que Cáceres se sentía muy distante y del que ahora se encuentra más alejado. Los datos que a continuación recogemos son harto elocuentes.

En el año 1966, en que se iniciaron los estudios del trasvase, las situaciones de las provincias eran como sigue:

	Densidad de población	Porcentaje de renta sobre el total nacional
MURCIA	72'09	1'86
ALICANTE	137'91	2'18
CACERES	24'78	0'85
TOLEDO	31'25	1'07

Examinamos ahora, utilizando las mismas fuentes, la situación en 1975:

MURCIA	77'70	2'10
ALICANTE	178'50	2'80
CACERES	21'50	0'70
TOLEDO	30'20	1'00

Los datos son tan elocuentes que no necesitan de comentario alguno. Más que señalar, para mayor abundamiento, que la provincia de Cáceres con renta media «per cápita» de 85.924 pesetas ocupa el último lugar en el concierto nacional y está muy lejos de alcanzar las cotas de Alicante o de Murcia con 135.578 y 112.233 ptas. respectivamente, y en las que los aumentos poblacionales son notorios, en tanto que en nuestra



res, de las obras de la presa del Jerte —que saldrán inmediatamente a subasta—, de los regadíos de diversas zonas...» Tanto y tanto y tan bien, que «Hoy», titulaba «EL GOBERNADOR CIVIL Y EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION VIENEN MUY COMPLACIDOS DE MADRID».

Todo quedaría reducido a la casi nada de la Comisión ésta o la Comisión aquella, una forma en definitiva de ir entreteniéndose el tiempo y de no dar a Cáceres lo que, a espaldas del pueblo y sobre el mismo pueblo, había sido pactado.

De vez en cuando, sí, una como renovación de promesa, tal la que Sánchez-Terán, subsecretario entonces del Ministerio de Obras Públicas, hiciera en junio de 1975, cuando vino a Cáceres y dijo:

—Ha llegado la hora de la verdad.

En aquella visita Sánchez-Terán significó también «el decidido propósito del Ministerio de poner en marcha los regadíos previstos en la Ley 21/71» y que su Departamento había preparado un conjunto importante de obras a realizar en la provincia, para terminar, como casi siempre se ha terminado cuando de Cáceres se ha tratado, con la memorable y nada original frase de:

—Pueden estar seguros de que Obras Públicas dedicará atención preferente a Cáceres.

Y el acueducto, erre que erre, camino de las «sedientas tierras del Sureste español», mientras que el régimen de Franco agonizaba en una lenta agonía durante los últimos meses de 1975.

Y murió Franco y, como estaba escrito en las previsiones sucesorias, Juan Carlos de Borbón, a título de Rey, asume la Jefatura del Estado español. La asume, en lo formal, con palabras que pudieron sonar a palabrería, pero con hechos sucesivos que vendrían a demostrar que Juan Carlos I quería ser Rey de todos los españoles, de todas las provincias y regiones que componen el mosaico español y desde unos supuestos absolutamente democráticos.

Tras una etapa de perplejidad, Juan Carlos nombra presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, que no fue el error que el propio Ricardo de la Cierva y muchos españoles más aventuraron que iba a ser, y España, paso a paso, se encausa por la vía democrática que el joven presidente pudo prometer y prometió.

Entre 1976 y 1979, que acaba de concluir y con el que se ha culminado lo que podría llamarse primer nivel de democratización del país todo es un forcejeo retórico en lo que se refiere a la «Ley de Aprovechamiento Conjunto». El poder local, en muchos casos, seguía estando en manos de quienes se dieron por satisfechos al conseguir algo —si lo consiguieron— que, condi-

provincia, debido al insuficiente desarrollo de sus posibilidades económicas, presenta un alarmante signo regresivo con pérdidas de unos 250.000 habitantes desde el año 1950, hasta tal punto, que con arreglo a la curva decreciente prevista, y si el factor desarrollo no corrige la misma, para el año 1980 habría de quedar reducida nuestra población a 377.000 habitantes.

No son suficientes, ni mucho menos, las medidas aprobadas en el Consejo de ministros del día 25 de mayo último, cuando aún en plan de prueba, se habían trasvasado ya los primeros 5 millones de metros cúbicos procedentes del río Tajo. Y ello no porque pensemos que dichas medidas fueron aprobadas con finalidad «amortiguadora» de un posible y lógico estado de opinión pública cacereña ante la consumación del trasvase, sino que no son suficientes porque la situación de subdesarrollo que se vive en la provincia de Cáceres viene padeciendo exige imperiosamente una acción de Gobierno en profundidad y de carácter global, que permitan poner en explotación todos los recursos agrarios de que es susceptible y la terminación de los estudios pendientes; así como la adecuación y mejora de toda la red viaria y la dotación de créditos con los que hacer frente a los abastecimientos de agua y red de saneamiento de sus poblaciones, y todo ello, como presupuesto previo e indispensable para alcanzar un conveniente grado de industrialización, siquiera sea a nivel del sector primario.

Por todo ello, consciente del malestar que la culminación de las obras del acueducto del Tajo-Segura y el comienzo del trasvase de las aguas del primero ha producido en la provincia, y de la inquietud de VV. SS. tanto por este tema cuanto por toda la difícil problemática que a nuestra provincia comporta, con la que no se han cumplido ni promesas ni obligaciones derivadas de norma legal, en momento de un proceso autonómico, en el que paradójicamente se vulneran los más elementales principios democráticos, someto a la consideración del PLENO corporativo la presente Moción, con el ruego de que acepten, si lo estiman procedente, las siguientes propuestas:

PRIMERA.—Oposición rotunda a que se trasvase un solo litro de agua en tanto en cuanto no se lleven a cabo en la provincia, todas las acciones compensatorias previstas en la Ley 21/71 de 19 de junio, y especialmente las siguientes:

—Ejecución de las obras de transformación de la totalidad de las zonas regables del Ambroz, Ribera de Fresnedosa y Valdecañas.

—Ejecución de los regadíos de Interés local con proyectos elaborados y redacción de los correspondientes a aquellos sobre los que se han efectuado estudios de viabilidad.

—Redacción de los proyectos de la zona del Bronco, y estudio y redacción de los de las zonas del Jerte, del Almonte y Salor y contratación de las correspondientes obras.

—Mejora y ampliación de los regadíos del Tiétar con aguas procedentes del Guadylas y garantía para la provincia de que no se verán afectados por la detención de aguas de este cauce con otro destino.

—Construcción de la Depuradora de Aguas Residuales de Cáceres.

—Aumento del porcentaje de aportación del Estatuto en las obras que se llevan a cabo por el Consorcio Provincial de Abastecimiento y Saneamiento.

SEGUNDA.—Que se deje sin efecto la aprobación del Estatuto de Regos del Segura con aguas procedentes del Tajo, hasta tanto sea conocido por esta Diputación, con opción a condicionarlo en cuanto a tarifas, do que las aguas del Tajo que se usurpan, son históricamente extremeñas.

TERCERA.—Pedir al Gobierno que con cargo al Fondo de Compensación Interregional se financie un Plan Bial 1980-81 de obras e Inversión de la Diputación, destinado preferentemente a abastecimiento y saneamiento de los municipios de Cáceres y a mejora de la red viaria y de equilibrio regional, que entendemos ha debido inspirar la obra del trasvase Tajo-Segura.

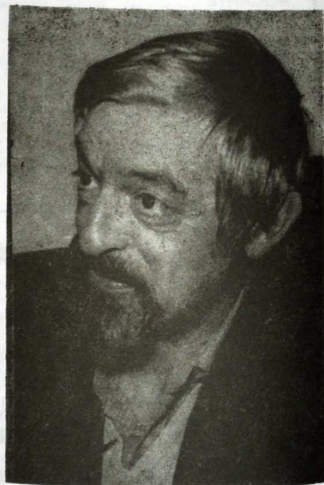
CUARTA.—Que en base a los mismos principios de solidaridad nacional y equilibrio regional y habida cuenta que la provincia de Cáceres ocupa uno de los índices más bajos en consumo de energía eléctrica por habitante, siendo así que alcanza uno de los primeros lugares en su producción, que se utiliza en otras provincias, el Gobierno establezca las debidas y necesarias compensaciones económicas, encauzándolas a través de los entes que ostentan la representación democrática del pueblo cacereño.

QUINTA.—Que en razón al aislamiento que padece la provincia y a su consecuente marginación de las áreas de desarrollo del país, el Gobierno apruebe una clara y decidida acción para la modernización, adecuación a unos estudios de viabilidad pertinentes, no era mucho más que una vaga declaración de intenciones, como la historia se ha encargado de demostrar.

Hasta que, aprobada la Constitución, llega la democracia a los poderes locales, municipios y diputaciones, y éstos, en uso de la soberanía que el pueblo otorga, tienen que enfrentarse por igual con el futuro y con el presente, con el pasado también.

Y el presente y el inmediato pasado eran para Cáceres un presunto «Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura», que el día 16 de junio llevó las primeras aguas de la cuenca del Tajo a las del Segura, cumpliendo casi totalmente lo que de aprovechable tenía el proyecto para las «sedientas tierras del Sureste español» y dejando sin cumplir todo o casi todo aquello que debería ser de provecho para las provincias expoliadas.

La Diputación, en sesión plenaria del 20 de junio, inició otra historia, que por el momento parece que acabará bien. 35.000 millones de pesetas, invertidas en tres años, no es, ni por aproximación, lo que Cáceres demanda, lo que a Cáceres se le debe. Pero puede ser un comienzo.



Texto:

DOMINGO TOMAS NAVARRO

(Fotos:

Archivo «Extremadura»)

café de redacción

Mientras en la cuenca del Segura se ha realizado el 64 por 100 de lo previsto, en Cáceres apenas se ha completado el 35 por 100

Propósito de la revista ALCANTARA es que el tema central de cada uno de sus números sea debatido en un «Café de Redacción», al que se invitarán personas significativas por sus conocimientos técnicos o por su representatividad política.

A este primer «Café de Redacción», en el cual se aborda el tema del trasvase y del «aprovechamiento conjunto», además de quienes estuvieron presentes, se invitaron a dos personas más: un miembro del PCE, que se excusó a última hora y una personalidad independiente, que sufrió un despiste

y no llegó a tiempo. Así, lo que hubiera sido un debate a cinco bandas, quedó reducido a un debate a tres, que nombramos por orden de intervención: Manuel Bermejo, Pablo Castellano y Gonzalo Barrientos, políticos y parlamentarios los dos primeros, profesor de la Universidad de Extremadura el tercero.

Sus intervenciones, con una intención clarificadora, han sido sintetizadas, lo cual en muchas ocasiones quita la frescura del lenguaje coloquial que tuvieron, pero permite que el lector se quede con lo esencial del pensamiento de cada uno.

cuación y, en su caso, construcción de una adecuada red viaria, poniendo especial énfasis de urgencia en las siguientes vías:

—C. N. 630 de Gijón-Sevilla.

—Carretera en construcción de Navalmoral - Plasencia - Coria - frontera portuguesa.

—C. N. 521 en su tramo Cáceres-Valencia de Alcántara.

—C. N. 110 de Plasencia a Barco de Avila.

—C. N. 523 de Cáceres a Badajoz, de indudable trascendencia regional y de decisiva influencia para el futuro de la Universidad Extremeña.

—C. 501 de Alcorcón a Plasencia por La Vera.

—C. 526 de Puente de Guadancil a Ciudad Rodrigo por Coria y Moraleja.

—C. 524 y C. 401, hasta sus límites provinciales.

SEXTA.—Atención especial por parte del Gobierno al Gran Área de Expansión Industrial de Extremadura, de reciente creación, para que posibilite un conveniente proceso de industrialización, e incentivando los beneficios a aplicar en razón a las excepcionales circunstancias de la zona.

SEPTIMA.—Aceleración de la construcción de viviendas sociales, de las que la provincia tiene un notable déficit.

OCTAVA.—Dar traslado de esta Moción y de sus acuerdos a los señores presidente del Gobierno, ministro de Obras Públicas y Urbanismo y ministro de Administración Territorial, insistiendo en la urgencia de adoptar las acciones a que se contraen los anteriores pedimentos y demandando atenciones especiales para esta provincia, de alarmante signo regresivo. Y hacemos ello en nombre del pueblo cacereño al que genuinamente representamos y al único que por lo tanto nos debemos en nuestra acción de servicio, entendiendo que con esta Moción expresamos el sentir de dicho pueblo.

NOVENA.—Dar cuenta de esta Moción y de sus acuerdos, a los Ayuntamientos de la provincia, para que a través de las Corporaciones representativas de las colectividades municipales respectivas y en su propio nombre, se dirijan, si lo estiman conveniente, a los señores presidente del Gobierno y ministros citados, expresando su solidaridad con esta Moción y acuerdos y exigiendo el cumplimiento de los mismos.

DECIMA.—Dirigir escrito, dando traslado de la presente Moción y de sus acuerdos a la Junta Regional de Extremadura y a los Parlamentarios extremeños en demanda de apoyo, para que, mediante una acción coordinada y solidaria, puedan alcanzarse los objetivos dichos.

DECIMOPRIMERA.—Advertir al Gobierno que si esta Diputación no obtiene respuesta a la presente Moción en el plazo de un mes, acudirá al apoyo del pueblo cacereño y de las diversas fuerzas políticas y sociales, para realizar conjuntamente las acciones directas que se estimen oportunas en defensa de sus justas reivindicaciones.

—Como sabéis —empezó Manuel Bermejo—, está en las Cortes la Ley de Regulación Económica del Trasvase Tajo-Segura y yo soy ponente por mi grupo político. Hemos estudiado a fondo cómo está en realidad todo el tema de las compensaciones del trasvase y, gracias al criterio de unidad que existe entre los distintos grupos, lo que parecía iba a ser muy polémico, no lo resultará tanto. Creo que los debates se van a simplificar mucho.

Analiza Bermejo la situación actual de las obras, tanto las del mero trasvase como aquellas que deberían haberse hecho en Cáceres en función de la «Ley de Aprovechamiento Conjunto»:

—A más de ocho años desde la promulgación de la Ley, cuando deberían estar equilibradas las inversiones en las cuencas del Tajo y del Segura, nos encontramos con que el acueducto, sobre un presupuesto final de 19.548 millones de pesetas, se han invertido ya 16.698. Falta, pues, un diez por ciento. En las obras del postravase, donde hay que invertir 26.514 millones de pesetas, se han invertido ya 12.614. Falta el cincuenta y dos por ciento. Sumadas obras de acueducto y obras de postravase, sobre un total de 46.062 millones de pesetas a